

36ª REUNION — 27ª SESION ORDINARIA — 7 DE SEPTIEMBRE DE 1949

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y del señor Roberto Dri

Secretarios, doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

ALBRIEU, Oscar E.
ALVAREZ PEREYRA, Manuel
ALLUB, Rosendo
ARAOZ, Ricardo E.
ARGANA, José M.
ASTORGANO, José
AYALA, Luis
AYALA LOPEZ TORRES, Francisco
BAGNASCO, Vicente
BALBIN, Ricardo
BENITEZ, Antonio J.
BERETTA, Eduardo
BERNARDEZ, Manuel
BIDEGAIN, Oscar R.
BONAZZOLA, Romeo E.
BONINO, Alberto C.
BRUGNEROTTO, Juan N. D.
BRUNO, Domingo
BUSTOS FIERRO, Raúl
BUTTERFIELD, Humberto
CAMPORA, Héctor J.
CAMUS, Eloy P.
CANDIOTI, Alberto M.
CANÉ, José
CARRERAS, Ernesto A.
CASAS NOBLEGA, Armando
CATTANEO, Atilio E.
COLOM, Eduardo
CONTE GRAND, José Amadeo
COOKE, John William
CÓRDOVA, J. Salvador
CUFRÉ, Orlando H.
CURSACK, Roberto Enrique
DAVILA, J. Aníbal
DECKER, Rodolfo A.
DEGREEF, Juan Ramón
DE LA TORRE, Juan
DEL CARIL, Emilio Donato
DEL MAZO, Gabriel
DELLEPIANE, Luis
DE PRISCO, Guillermo
DIAZ, Carlos A.
DIAZ, Manuel M.
DIAZ DE VIVAR, Joaquín
DRI, Roberto
ERPO, Saturnino S.
ESTRADA, Ángel C.
FERNANDEZ, Hernán S.
FERRANDO, Manuel P.
FERRER, Modesto
FILIPPO, Virgilio M.
FORTEZA, Eduardo Julio

FREGOSSI, Luis J.
FRONDIZI, Arturo
GARAGUSO, Bernardino Hipólito
GARAY, Marcelino S.
GARCIA, Manuel
GIL FLOOD, Mario
GONZALEZ GUNES, Tomás
GUARDO, Ricardo C.
HARAMBOURE, Horacio
IBARGUREN, Prudencio M.
ILIA, Arturo U.
LAGRANA, Héctor D.
LAREO, Ricardo
LASCIAR, Guillermo F.
LAVIA, Ludovico
LELOIR, Alejandro H.
LEMA, Manuel E.
LETAMENDI, Balbín (h.)
LICEAGA, Félix J.
LOPEZ SERROT, Oscar
LUCINI, Raúl Felipe
MACHARGO, Alfredo F.
MAINERI, D. Jacinto
MALDONADO LARA, José María
MANTARAS, Manuel J.
MARIATEGUI, Angel S.
MARINI, Angel C.
MAROTTA, José
MARTINEZ GUERRERO, Guillermo
MARTINEZ LUQUE, Enrique
MERCADER, Emir E.
MESSINA, Humberto
MIEL ASQUÍA, Angel J.
MONJARDIN, Federico F.
MONTES, Abel
MONTES, Juan Manuel
MONTES DE OCA, Carlos
MONTIEL, Alcides E.
MORENO, José Luis
NORIEGA, Juan J.
NOVELLINO, Francisco
OSINALDE, Rafael
OTTONELLO, Benito J.
PALACIO, Ernesto
PASQUALI, Juan Domingo
PASQUINI, José P. D.
PASTOR, Reynaldo A.
PEREA, Pedro J.
PEREYRA, Luis Alberto
PIEROTTI, Mario
PIRANI, Antonio S.
PONCE, Angel L.
RABANAL, Francisco
REPETTO, Agustín

REYNES, Leandro B.
RICAGNO, Roberto
ROCHE, Luis Armando
RODRIGUEZ, Manuel
RODRIGUEZ, Nerio M.
RODRIGUEZ DE LA TORRE, Raúl
ROJAS, Absalón
ROJAS, Nerio
ROSSI, José
ROUGGIER, Valerio S.
RUDI, Ricardo
RUMBO, Eduardo L.
SANCHEZ, Pedro
SAN MILLAN, Ricardo Antonio
SANTANDER, Silvano
SAPORITI, Luis
SARAVIA, Teodoro S.
SARMIENTO, Manuel
SEEBER, Carlos Manuel
SILVESTRE, Adolfo J. B.
SOBRAL, Antonio
SOLA, Fernando
STINCO, Luis A.
TILLI, Pedro
TOMMASI, Victorio M.
TORO, Ricardo
TREBINO, Natalio
URANGA, Raúl L.
URTIAGA RILBAO, Mateo de
VALDEZ, Celestino
VELLOSO COLOMBRES, Manuel F.
VERGARA, Amando
VILLACORTA, Luis René
VILLAFANE, José María
VISCA, José Emilio
VISCHI, Albino
VITOLO, Alfredo R.
YADAROLA, Mauricio L.
ZAMUDIO, Juan Carlos
ZANONI, Pedro P.
ZAVALA ORTIZ, Miguel Angel

AUSENTES, CON LICENCIA:

CLEVE, Ernesto
FAJRE, José Benito
MAC KAY, Luis E.
PÉREZ MARTÍN, José
PONTIERI, Silverio
TEJADA, Ramón Washington
VANASCO, Julio A.
VAREA, Isidoro

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Izamiento de la bandera nacional.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- II.—Comunicaciones oficiales.
- III.—Despachos de comisión.
- IV.—Peticiónes particulares.
- V.—Proyecto de ley del señor diputado Messina: subsidio, para obras, al Club Atlético Nueva Chicago, de la Capital Federal.
- VI.—Proyecto de ley del señor diputado de la Torre: subsidio al Consejo Diocesano de la Juventud de Acción Católica de la Diócesis de Mendoza y Neuquén.
- VII.—Proyecto de ley del señor diputado de la Torre: edificio para la Escuela Nacional N° 81 General San Martín, ubicada en El Plumerillo, departamento Las Heras, provincia de Mendoza.
- VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Martínez Luque: créditos para la construcción de oficinas de Correos y Telecomunicaciones en Laborde, Canals, Noetinger y otras localidades de la provincia de Córdoba.
- IX.—Proyecto de ley del señor diputado Martínez Luque: crédito para la construcción de oficinas de Correos y Telecomunicaciones en Fururia, La Laguna, La Playosa y otras localidades de la provincia de Córdoba.
- X.—Proyecto de ley del señor diputado Martínez Luque: ampliación de crédito destinado a la construcción de edificio para el Colegio Nacional de Villa María, provincia de Córdoba.
- XI.—Proyecto de ley del señor diputado Zavala Ortiz: créditos para la construcción de oficinas de Correos y Telecomunicaciones en San Basilio, Sampacho, Baigorria y otras localidades de la provincia de Córdoba.
- XII.—Proyecto de ley del señor diputado Casas Noblega: pensión a la señora Anatilde Seijó de Ibarrola.
- XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Conte Grand: subsidio para la atención de servicios de hospitales, microhospitales y salas de primeros auxilios dependientes de la administración sanitaria y asistencia pública de San Juan.

- XIV.—Proyecto de ley del señor diputado Rojas (A.): reformas al Código Penal en materia de enriquecimiento ilícito.
- XV.—Proyecto de ley del señor diputado Saravia: pensión a la señora Laura Holmberg de Bracht.
- XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Velloso Colombres: pensión a las señoritas Mariana y Juana Mustile.
- XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Butterfield: construcción de edificios para la Escuela Normal Mixta Tomás Godoy Cruz, de la ciudad de Mendoza, y para la Escuela de Maestros Normales Regionales, del departamento Rivadavia, Mendoza.
- XVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez (N. M.): construcción de un campo de deportes para los alumnos de los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación, de la ciudad de Tucumán.
- XIX.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez (N. M.): modificación de la ley 4.863, de defensa agrícola.
- XX.—Proyecto de ley del señor diputado San Millán y otros: pensión a la señora Emma Beltrán Neiro de Galdiz e hijos menores.
- XXI.—Proyecto de ley del señor diputado Rumbo y otros: pensión a la señora María Real de Azúa de Ezcurra.
- XXII.—Proyecto de ley del señor diputado Butterfield y otros: creación de una Comisión de Planificación del Sur Patagónico.
- XXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Mercader: aumento de pensión a la señora Rosa María Silva de Pelle.
- XXIV.—Proyecto de ley del señor diputado Degreef: subsidio al Tiro Federal, de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe.
- XXV.—Proyecto de ley del señor diputado Rossi y otros: pensión a la señora Hemilce Ayala de Pastorello.
- XXVI.—Proyecto de ley del señor diputado Reynés: pensión al teniente de navío de la reserva auxiliar de la marina de guerra ciudadano Vito Dumas.
- XXVII.—Proyecto de ley del señor diputado Repetto: pensión a la señora Nieves Lapieza de Antille.
- XXVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Ferrer: pensión a la señora Angela G. de Crujada.
- XXIX.—Proyecto de ley del señor diputado Montes: pensión a la señora Laura Ferrari de Casalegno.

- XXX.—Proyecto de ley del señor diputado **Fastor y otros: pensión** a la señora Dolores Seguí de Fonrouge.
- XXXI.—Proyecto de ley del señor diputado **Córdova: pensión** a la señora Juana M. de Roselli.
- XXXII.—Proyecto de ley del señor diputado **Velloso Colombres: pensión** a la señora María Josefa del Matti de Ponce.
- XXXIII.—Proyecto de ley del señor diputado **Pierotti: pensión** al señor Dionisio Ireneo Ocampo.
- XXXIV.—Proyecto de resolución del señor diputado **Filippo: inscripción de leyendas** en los paneles del recinto de sesiones de la Honorable Cámara.
- XXXV.—Proyecto de declaración del señor diputado **Bonino** sobre instalación de una cabina telefónica en Esmeralda, provincia de Santa Fe.
- XXXVI.—Proyecto de declaración del señor diputado **Bonino** sobre instalación de una cabina telefónica en Villa San José, provincia de Santa Fe.
- XXXVII.—Proyecto de resolución del señor diputado **Martínez Luque**, por el que se invita al Honorable Senado a constituir una comisión parlamentaria encargada de proyectar un Código del Trabajo.
- XXXVIII.—Proyecto de resolución del señor diputado **Santander y otros: pedido de informes** al Poder Ejecutivo relacionados con la actuación en el país del ex embajador de los Estados Unidos de América, señor Spruille Braden.
- XXXIX.—Proyecto de resolución del señor diputado **Rodríguez (N. M.): creación** de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Concepción, departamento de Chichigasta, Tucumán.
- XL.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:
- 1.—Del señor diputado **Zavala Ortiz: pedido de informes** al Poder Ejecutivo sobre separación de magistrados judiciales, y sobre acuerdos prestados a magistrados por el Honorable Senado de la Nación.
 - 2.—Del señor diputado **Camus y otros: expresión del deseo** de que no se autorice a bodegueros de Cuyo a disminuir la graduación alcohólica de los vinos.

- 4.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados: **Vanasco, Pérez Martín, Tejada, Mac Kay, Fajre, Varea y Pontieri.**
- 5.—Integración de comisiones.
- 6.—Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Moción: reposición de una placa recordatoria en la casa natal del prócer.
- 7.—Homenaje a la memoria del ex diputado Emilio Cardarelli.
- 8.—Homenaje al doctor Adolfo Saldías.
- 9.—Homenaje a la memoria del capitán Raúl Héctor Roca.
- 10.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Marini** con motivo de publicaciones periodísticas.
- 11.—Aclaración solicitada por el señor diputado **Santander** respecto a una iniciativa de que es autor presentada en la sesión anterior.
- 12.—Moción del señor diputado **Visca** de que la Honorable Cámara estudie en comisión el proyecto de ley sobre construcción de edificios para Correos y Telecomunicaciones.
- 13.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley a que se refiere el número 13 de este sumario.
- 14.—Consideración del despacho, producido por la Honorable Cámara en comisión, en el proyecto de ley a que se refieren los números 12 y 13 de este sumario. Se sanciona.
- 15.—Moción del señor diputado **Visca** de preferencia para el proyecto de ley sobre represión del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
- 16.—La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley a que se refiere el número 15 de este sumario.
- 17.—Consideración del despacho, producido por la Honorable Cámara en comisión, en el proyecto de ley a que se refieren los números 15 y 16 de este sumario. Se sanciona.
- 18.—Apéndice:
 - I.—Sanciones de la Honorable Cámara.
 - II.—Inserciones.
 - III.—Discurso pronunciado por el señor diputado **Federico F. Monjardin** en representación de la Honorable Cámara en el acto del sepelio de los restos del extinto diputado doctor Roberto Parry.

—En Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre de 1949, a la hora 16:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Mercader. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a rectificar la votación.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 86 señores diputados.

16

CONFERENCIA. — ASISTENCIA FAMILIAR

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda abierta la conferencia, a fin de considerar el proyecto comprendido en la orden del día 403, sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se dará cuenta del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substraieren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido.

Art. 2º — En las mismas penas del artículo anterior incurrirán en caso de substraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun sin mediar sentencia civil:

- a) El hijo, con respecto a los padres impedidos;
- b) El adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido y el adoptado con respecto al adoptante impedido;
- c) El tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho años, o de más, si estuviere impedido, o al incapaz que se hallare bajo su tutela, guarda o curatela;
- d) El cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa.

Art. 3º — La responsabilidad de cada una de las personas mencionadas en los dos artículos anteriores no quedará excluida por la circunstancia de existir otras también obligadas a prestar los medios indispensables para la subsistencia.

Art. 4º — Agrégase al artículo 73 del Código Penal el siguiente inciso:

5º Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.

Art. 5º — La presente ley se tendrá por incorporada al Código Penal.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Belisario Gache Pirán.

ANTECEDENTES

Buenos Aires, 29 de julio de 1949.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad remitiendo el adjunto proyecto de ley sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Entre las innovaciones de más profundo sentido social que contiene la Constitución Nacional recientemente sancionada, merecen citarse las que consagran el derecho de la familia y el derecho de la ancianidad. Al definir a aquella como el núcleo primario y fundamental de la sociedad, establece que el primero de esos derechos será objeto de preferente protección por parte del Estado (artículo 37, apartado II). En cuanto al segundo, prescribe que todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia, atribuyendo al Estado la potestad de demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes (artículo 37, apartado III, párrafo 1).

La concepción políticosocial que inspira la reforma y la nobilísima finalidad perseguida, exigen que esos derechos sean vigorosamente tutelados en todos los ámbitos de la legislación. Incumbe, pues, al Poder Legislativo sancionar los preceptos legales necesarios para hacer efectivos los altos propósitos perseguidos por los constituyentes. No hay duda que la plena y total realización de dichos propósitos exigirá la sanción, a su debido tiempo, de un verdadero código o cuerpos legales especializados en estas importantes materias de la familia, la infancia y la ancianidad. Pero sin perjuicio de ello, es también cierto que urge la pronta sanción de normas tendientes a reprimir penalmente los más graves atentados contra los bienes tutelados por la Constitución y que nada impide que lo sea desde ya. El derecho penal no puede permanecer por más tiempo en postura de indiferencia ante la tarea programada de consolidar la institución de la familia, núcleo elemental y primario, del que el hombre es criatura y en el cual ha de recibir insustituiblemente la formación sobre la que construirá todo el curso de su vida, según las palabras vertidas en la reciente Convención Nacional (Diario de Sesiones, página 275).

A ese propósito tiende, precisamente, este proyecto de ley complementaria del Código Penal que el Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad, por el que se crea el delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, previendo sanciones de multa y privativas de libertad para aquellos que maliciosamente se substraieren a las primordiales obligaciones debi-

das a los componentes del núcleo familiar. Con ello, el Poder Ejecutivo entiende que se fortalecerá con eficacia lo que constituye uno de los pilares de nuestra estructura social.

La incriminación propuesta no importa, por lo demás, una novedad en la legislación comparada más reciente.

Desde que Francia sancionó como delito el abandono de familia por ley del 4 de febrero de 1924, son varias las naciones que, de una u otra manera, siguieron su ejemplo. Así lo hicieron Holanda, Austria, Dinamarca, Inglaterra, España, Italia, Canadá, Noruega, Brasil, Letonia, Alemania, Portugal, Nueva Zelandia, Polonia, Checoslovaquia, Suiza, Estados de Illinois, Virginia, Massachusetts, Carolina, y fué motivo especial de preocupación en el Comité de Protección a la Infancia de la Sociedad de las Naciones (1926), en la V Comisión de la Asamblea de la Liga de las Naciones (1932) y en la IV Conferencia para la Unificación del Derecho Penal (Madrid, 1933). Tampoco entre nosotros se desconoce la conveniencia de reprimir el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pues dicha incriminación ha sido prevista en alguna medida, por los proyectos Coll-Gómez (1937) y Peco (1941) y ha sido propiciada por los camaristas del fuero penal doctor Antonio Luis Beruti («Breve excursión por las lagunas del Código Penal», en «Anales de la Sociedad Argentina de Criminología», 1937) y Ernesto J. Ure (*La protección penal de la familia*, Buenos Aires, 1936).

Por otra parte, no es ésta, en nuestro medio, la primera tentativa de sancionar el abandono de los deberes asistenciales. Así, la ley 10.903, del año 1919, significó ya una reforma fundamental en punto a derechos que muchos concebían como absolutos, al definir a la patria potestad como a un conjunto no sólo de derechos sino también de obligaciones.

Claro está que no han faltado opiniones adversas a la incriminación propuesta, aunque reducidas en número e incapaces de oponerse al arrollador impulso con que los nuevos principios sociales y asistenciales se están haciendo presentes en todos los aspectos de nuestra legislación.

El presente proyecto ofrece un aspecto novedoso, en cuanto se aparta de los ordenamientos legislativos vigentes. En efecto, el texto que se somete a vuestra honorabilidad va más allá que la legislación francesa, pues ésta, aun después de las modificaciones sancionadas en 1942 con el objeto de ampliar las previsiones de la ley de 1924, no alcanza a tutelar muchas situaciones que merecerían protección. En cambio, el proyecto no va tan lejos como el Código Penal italiano, que, al incluir en la incriminación situaciones de abandono puramente moral, permite una intervención del Estado en la intimidad del hogar doméstico que no condice con la sensibilidad y el estilo de vida argentinos.

En verdad, el proyecto adopta, podriase decir, una posición intermedia. Tiene en mira la protección del desamparado en cuanto miembro de la comunidad económica familiar, frente a quienes tienen deberes, fundados en elementales sentimientos de solidaridad, de atender a los medios para su subsistencia. Por «medios de subsistencia» se entiende en este proyecto el conjunto de los elementos vitales indispensables para subsistir materialmente —alimentos, vestido, habitación— y no a todos los demás deberes impuestos por la ley a los abuelos, padres, hijos,

cónyuges, adoptantes, curadores y tutores. Se agrega a este elenco el «guardador», pese a que el Código Civil no lo menciona entre los representantes legales de los incapaces, en razón de que no es posible desconocer su realidad en nuestro medio y a que la ley 10.903 lo mencionó y el Código Penal de 1922 le reconoció personería en las disposiciones relativas a los menores delincuentes y a la agravación de los delitos de violación, corrupción, estupro y abuso deshonesto. El concepto, de guardador, ha dicho la Cámara del Crimen de la Capital Federal, debe entenderse referido nada más que a una potestad de hecho ejercida sobre el menor (*Fallos*, V, 267). La figura del «guardador» no es insólita. Por el contrario, es frecuente en aquellos casos, bastante numerosos por cierto, en que la ausencia del interés económico, hace innecesario acudir a la justicia para la designación de representante legal.

De más está poner en relieve que el delito previsto en el presente proyecto requiere, para su comisión, dolo por parte del sujeto activo. En otros términos, sólo caen dentro de las previsiones legales aquellos que, además de encontrarse económicamente capacitados para cumplir con sus deberes de asistencia, deciden adoptar una actitud esquiva y remisa con pleno conocimiento de las circunstancias. De ahí que los textos proyectados, para evitar toda confusión, no incriminan simplemente a los que «no prestaren» los medios de subsistencia, sino a los que se «substraieren» a prestarlos. Y es claro que, para afirmar que alguien se ha substraído al cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no basta con que haya sido negligente en alguna oportunidad, sino que es menester la comisión significativa de hechos deliberadamente omisivos.

Advertirá vuestra honorabilidad que le proyecto no supedita el ejercicio de la acción al incumplimiento de una anterior sentencia que imponga la obligación de pasar alimentos a ciertos parientes. Tal requisito es teórica y prácticamente criticable, puesto que aquí se trata de un delito cuya objetividad jurídica es la familia, cuya protección se procura, y no el buen orden judicial o el respeto a los fallos de los jueces, bienes éstos tutelados en otras normas. Por otra parte el régimen de la condenación judicial previa suele hacer ilusorias o lamentablemente demoradas, en muchos casos, las prestaciones alimentarias. Un eminente jurista italiano, Ugo Aloisi, en una cáustica crítica al sistema francés, expresó que «no se puede decir a una desgraciada prole que tiene hambre: muníos de una sentencia del juez civil, dejad que pase en autoridad de cosa juzgada, esperad todavía que transcurran tres meses y luego acudid recién al juez del crimen». («La protezione penale della famiglia», en *Riv. di Dir. Penitenziario*, 1934.)

Por otra parte, conviene tener presente que la prestación de «medios de subsistencia», cuyo incumplimiento se sanciona penalmente, no puede ser superpuesta o confundida con la obligación alimentaria civil. Mientras aquella prestación se cumple proveyendo a las necesidades vitales primarias, esta última se regula con un sentido más amplio, teniendo en cuenta la condición social y caudales del alimentado y del prestador de alimentos (Código Civil, artículo 372; Código de Procedimiento Civil, artículo 602, inciso 2º). La diferencia se advierte en forma patente si se piensa que quien no cumple debidamente con la obligación alimentaria civil puede todavía no estar incurso en el delito de cuya incriminación se

trata. Es que la obligación de prestar los medios indispensables para subsistir, recién surge frente a un estado de real necesidad, de verdadera indigencia, extremo al que no es indispensable llegar para hacer civilmente exigibles los alimentos. Otra diferencia entre una y otra obligación se advierte si se piensa que el círculo de parientes alcanzados por la obligación impuesta por el Código Civil es mucho más amplio que el de los alcanzados por este proyecto, que no incrimina más que a los integrantes del núcleo central de la familia, y a los que asumen su lugar.

Desde otro punto de vista, los deberes de asistencia previstos en el presente proyecto revisten —según ya se ha señalado— un sentido económico, que permite considerar excluidos de esta represión penal los casos de abandono moral. De tal modo, la ley que ahora se proyecta se distancia netamente del régimen italiano, para el que —como ya se ha dicho— también son punibles esas situaciones. A juicio del Poder Ejecutivo, no es conveniente dilucidar ante los tribunales del crimen problemas reservados a la intimidad del hogar y que tienen suficiente solución en las normas del derecho privado. Las actuales valoraciones de la sociedad argentina rechazarían enérgicamente una incriminación que haría posible llevar a los estrados de la justicia en lo penal —como ha ocurrido en Italia— situaciones como la del esposo que se alejó del hogar conyugal sin dejar por ello de hacerse cargo de los gastos de los suyos, y hasta la del esposo que se negó a compartir el lecho conyugal.

Finalmente, advertirá vuestra honorabilidad que las normas proyectadas sueran la deficiencia de las disposiciones del Código Civil en cuanto al alcance de las obligaciones del tutor y del curador, por lo que a los aspectos alimentarios y subsistenciales se refiere. Así, de acuerdo con la legislación vigente, el tutor no tendría —a diferencia de lo que ocurre con el padre (Código Civil, artículo 265)— obligación de proveer, de su peculio, los alimentos requeridos por su pupilo indigente, ya que su deber se limitaría a exigir esa prestación a los parientes y, en ausencia de éstos, a colocarlo (Código Civil, artículos 428 y 430). En verdad, esta manera de concebir las obligaciones legales de los tutores y curadores para con sus pupilos indigentes, así como la ya señalada ausencia de normas en el Código Civil acerca de los guardadores, constituyen una prueba más de la ausencia de sentido social de que adolece, en muchas de sus partes, nuestra ley civil. En efecto, parecería que sólo importara prever con prolijidad las situaciones que se plantean en círculos familiares pudientes, quedando relegados a un segundo plano, los problemas de los humildes. Huelga decir que este gobierno considera como un urgente imperativo la tarea de borrar estas diferencias, toda vez que, por una u otra razón, corresponda al legislador enfrentarse con ellas. En este sentido, la legislación proyectada, aunque destinada a ser incorporada al Código Penal, viene a aclarar suficientemente la situación reseñada más arriba, sin perjuicio de que esta reforma sea consolidada oportunamente, cuando se dé término por el gobierno a la ya iniciada tarea de revisar en todas sus partes al Código Civil.

En síntesis, cabe destacar que los textos proyectados no hacen sino traducir en normas jurídicas puntos de vista acerca de la institución familiar que son unánimes entre los argentinos y que han tenido expresa consagración en la carta constitucional que nos rige.

Con la sanción de este proyecto, vuestra honorabilidad habrá hecho un valioso aporte a la obra social de tan vastos alcances en que está empeñado el gobierno de la Nación con la colaboración necesaria de todos los órganos del Estado.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Belisario Gache Pirán.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Conte Grand. — La orden del día 403 contiene el despacho de la Comisión de Legislación Penal en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se propicia la creación del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

El proyecto de ley ha sido considerado por la comisión que presido, y debo destacar la circunstancia auspiciosa de haberse despachado por la unanimidad de sus miembros.

Si bien no voy a informar el despacho en nombre de la comisión, puesto que la Cámara está constituida en conferencia, deseo vivamente intervenir en la consideración de este asunto, haciéndolo con íntima satisfacción, porque estimo que este proyecto va a contribuir eficazmente a lograr uno de los fines primordiales de la Constitución, cual es el de proteger y vigorizar en toda forma la familia.

Con toda altivez nuestro movimiento puede proclamar que gracias a su impulso viril la Constitución Nacional tiene incorporadas a sus principios rectores y dogmáticos disposiciones que contemplan expresamente este elemento natural e indestructible para toda sociedad civilizada, es decir, el núcleo familiar.

El artículo 37 de la Constitución, en su párrafo 2º, relativo a la familia, dice enfáticamente que: «La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos (y aquí está la confirmación de la filosofía que lo inspira) en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.»

En los puntos siguientes de este párrafo II del artículo 37, la Constitución dice: «El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad; el Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca; el Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine; la atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.»

Siempre dentro del orden de ideas de proteger el núcleo familiar y cada uno de los seres humanos que lo integran, la Constitución

dispone más adelante con referencia a la ancianidad que: «Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de su familia.» Como se ve, la Constitución reconoce en primer término la existencia de la familia y, a la vez que fija los principios fundamentales para su protección, determina que las obligaciones de socorro y de toda forma de asistencia corresponden en primer orden a los miembros de la propia familia. Quiere decir que toma el elemento cristiano, producto de la civilización cristiana, como es la familia y particularmente nuestra familia, la familia argentina; y da las normas indispensables para su protección, para su desarrollo y su perfeccionamiento.

Ante estas disposiciones de carácter constitucional cabe preguntarse si el Congreso, en su función de dictar las leyes que reglamenten los derechos consagrados por la Carta Fundamental, debe proceder de una sola vez o en grandes etapas, sancionando cuerpos orgánicos de legislación, o puede, como en este caso, abocarse a la sanción de leyes que contemplen diversos aspectos, que integren dentro de la ortodoxia de la Constitución un todo orgánico.

Entre un criterio y otro, en cuanto a la forma de encarar el Congreso su tarea legislativa, pienso yo que haremos bien en dar sanción a un proyecto como el que estamos considerando, y que si nos mantenemos dentro de los principios de la Constitución es preferible que no pretendamos alcanzar de inmediato lo ideal, demorando la sanción de leyes a la espera de ese todo orgánico, sino que más bien vayamos dando estas diversas sanciones que en definitiva, con el correr del tiempo, van a significar una experiencia grávida de consecuencias muy fecundas para la perfección de la legislación nacional.

La familia, como lo definiera dentro de los principios de nuestra doctrina —y por cierto que lo hizo magistralmente— el convencional Sampay, es el núcleo social, elemental y primario del que el hombre es criatura y en el cual ha de recibir, insustituiblemente, la formación sobre la que construirá todo el curso de su vida.

Nuestra tesis, señor presidente, en lo que concierne a la postura y a las relaciones del Estado con la familia, no es, por cierto, una posición reglamentarista, de sentido totalitario, como es la que en algunos países lleva al poder público a reglar todos los aspectos, hasta los más mínimos, del grupo familiar, con lo que sólo se consigue esclavizar y suprimir la familia. Pero tampoco, señor presidente, es el concepto típicamente liberal, según el cual el Estado puede quedarse cruzado de brazos frente a esta realidad natural e innegable que es la familia. Por lo tanto, la justa concepción, la concepción cristiana y —diré dentro de la

terminología de nuestro movimiento— la concepción justicialista, es aquella según la cual, como lo proclama la Constitución, el Estado reconoce la existencia de la familia y crea la estructura indispensable para que se desarrolle con espontaneidad y con libertad, pero sin que el Estado se desentienda de los dolores, de las dificultades económicas y de todas las vicisitudes que pueda sufrir la familia.

El doctor Ramella, en su magnífica obra *La estructura del Estado*, recuerda a este propósito que familia y Estado son términos indisolublemente unidos. Ni la familia puede vivir —dice— sin el Estado, ni éste puede existir sino integrado por familias. Recuerda con este motivo que Aristóteles, aunque estimaba indudable que el Estado es antes que la familia y que los individuos —concepción que no aceptamos—, el propio autor de *La Política* reconoce que el Estado está siempre constituido por familias.

Dice más adelante el doctor Ramella que, cualesquiera sean las comprobaciones de la investigación histórica sobre el origen de la familia y de la especulación filosófica sobre sus relaciones con el Estado, hay un hecho cierto e incontestable, y es el de que cuando más vigorosamente está constituida la familia, más próspero y fuerte es el Estado. Y afirma que podría establecerse esta igualdad: familia bien constituida, Estado bien constituido. De ahí —dice— los deberes que tiene el Estado para con la familia, que no deben convertirse en una injerencia abusiva, ni menos tener por mira esclavizarla al servicio del Estado.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Roberto Dri.

En el afán de contemplar esta realidad y de brindarle el amparo del Estado por todos los medios, nosotros tropezamos con algunos matices que han motivado en otros países polémicas enconadas. La diversidad de criterios se refleja también en las distintas concepciones que inspiran las leyes que se ocupan del delito que estamos tratando.

Cronológicamente, la primera manifestación legislativa por la que se incriminan las faltas consistentes en la omisión de los deberes de asistencia al núcleo familiar es la ley inglesa del año 1824, que estableció penalidades para los hombres de vida desarreglada que, pudiendo hacerlo, no subvinieran a las necesidades de su familia o abandonaran a su mujer y a sus hijos.

Muchos países han ido incorporando a su legislación preceptos de orden penal para sancionar diversos aspectos del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pero no han seguido un criterio homogéneo. La lista de ese tipo de legislaciones es extensa. Cabe recordar

especialmente el código italiano de 1930, los códigos alemán, noruego y ruso, algunas leyes de Estados americanos, el código penal del Brasil, además de muchos otros que modernamente han establecido este tipo de penalidad.

El ejemplo de la legislación extranjera podría inducirnos, como ha ocurrido otras veces, a tomar lisa y llanamente de algún modelo legislativo el precepto penal y a tratar de adaptarlo a la realidad argentina. Para no correr el riesgo de dictar una ley que no se avenga a la idiosincrasia de nuestro pueblo o que, en caso de dictarse, luego no pueda imponerse a la realidad a que está destinada, es conveniente que reflexionemos, en primer término, si dentro de nuestra realidad social es necesaria o es inconveniente una ley que pene el delito que afecta a la protección de la familia.

La experiencia de otros países —especialmente de las naciones europeas— es realmente pavorosa, en la época moderna, en todo cuanto se refiere a la estabilidad, a la organización, a la moralidad y a la integridad de la familia. Lo han señalado repetidamente autores como Cuello Calón, Manzini, Ferrer Sama, todos los cuales han propugnado decididamente, y han aplaudido después, la sanción de medidas discriminatorias frente a la realidad dolorosa de la desagregación de la familia, de su creciente decadencia y de su constante exposición a todos los factores de perversión y corrupción.

En nuestro medio yo pienso que podemos gloriarnos de tener un tipo general de familia de orden cristiano, donde impera el respeto recíproco y donde existen una verdadera caridad y solidaridad familiares. Pero no debemos permanecer indiferentes a factores disociativos que van creciendo paralelamente al relajamiento universal de las costumbres, a la ausencia de prácticas y de creencias religiosas y a toda clase de causas que aquí, como en todas partes, están gravitando para la disgregación del núcleo familiar. Por eso pienso que podemos decidarnos sin ningún titubeo por la aceptación de la penalidad que se proyecta respecto del incumplimiento de ciertas obligaciones de tipo familiar.

Los miembros de nuestra familia, por razones de moral y por disposiciones expresas de nuestra ley civil, están en el deber de proveer recíprocamente a su socorro y a su asistencia, en un régimen de respeto y de amor.

El Código Civil, después de definir y calificar las relaciones parentales, determina de manera clara y expresa estas obligaciones de asistencia recíproca. Los padres, que como señalaba Santo Tomás son principio de generación y de perfeccionamiento, tienen en primer término esa obligación esencial respecto de la prole. La obligación se establece, asimismo, para los cónyuges entre sí, los ascendientes en general con relación a sus descendientes, y viceversa; los hermanos, los suegros y las suegras, etcétera.

El ámbito de aplicación de la ley civil es amplio, pero, como es natural, se mueve en el plano de la acción privada. Quiere decir que tanto en nuestro derecho como en el de todos los países civilizados del mundo existen reglas y acciones civiles para hacer efectivos los deberes recíprocos de asistencia entre los miembros de una misma familia.

Con relación a este planteamiento, cabe preguntarse nuevamente si esas normas y esas acciones puramente privadas resultan suficientes para mantener la cohesión y poner a salvo la moralidad de la familia. Coincido con el pensamiento del Poder Ejecutivo, expresado en el mensaje con que acompaña este proyecto de ley, en cuanto a que en la hora en que vivimos no bastan las normas y las acciones del derecho privado.

Como lo señala Pierre Casanova en una monografía sobre esta figura delictiva, creo que en épocas o en procesos de relajamiento moral la ley debe recoger y hacer suyo todo principio moral que por decadencia de las costumbres o por factores de cualquier otra índole pueda caer en desuso.

Pero aceptadas esa necesidad y esa premisa, se presenta la dificultad, muy escabrosa por cierto, de encarar la caracterización de esta figura penal, dándole un alcance mayor o menor.

En nuestro país existen dos antecedentes valiosos: el proyecto del año 1937, elaborado por los doctores Coll y Gómez, y más tarde el proyecto del ex diputado doctor Peco. En los dos se propone la creación de una norma penal, en substancia idéntica a la que estamos considerando.

Con motivo de esas proposiciones, el doctor Peco, que es más explícito en su brillante exposición de motivos, se pregunta —como lo he hecho yo hace un momento— si es propio que la ley penal se introduzca en el seno de la familia para sancionar el incumplimiento de algunos deberes; y después de contestarse con una rotunda afirmativa, hace notar que las disidencias que existen, y que pudieran existir, sobre los factores de esta incriminación, no giran sino sobre ciertos matices, sobre ciertos detalles, que son los que se traslucen al comparar las diversas legislaciones.

Se puede discutir, como lo señala el doctor Peco, la amplitud de la ley en cuanto a las personas que puedan ser sancionadas por sus preceptos; también se puede controvertir acerca del tipo de acción en el delito, ya se trate de acción pública o de acción de instancia privada, o de acción puramente privada. Reconoce que se pueda disentir en cuanto a la calidad de la pena y, en fin, sobre otros detalles que hacen a esta figura delictiva.

Pero, señor presidente, en su aspecto substancial es indubitable que nos pondremos de acuerdo. Decía, al principio de mi exposición, que la

Constitución de la República establece, respecto de la familia, las normas propias de una concepción justicialista, por oposición a normas de tipo liberal o de tipo totalitario. En ese orden de principios y de ideas, en nuestro país no podríamos seguir un criterio amplio de incriminación, como en el código penal italiano del año 1930, que abarcaba no sólo la obligación de la asistencia económica, sino de la asistencia moral y material. No podemos hacerlo por nuestros principios y porque eso trae todos los riesgos y es instrumento peligroso para la extorsión y disgregación de la familia, a la que, aparentemente, según esas disposiciones, se trataría de proteger. El proyecto del Poder Ejecutivo rechaza decididamente, según lo señala el mensaje, un criterio de esa naturaleza. El proyecto incrimina exclusivamente, para no entrar en intimidades de la vida familiar y conyugal, el decaimiento en el cumplimiento de los deberes de asistencia en lo económico, o sea en cuanto atañe al soporte pecuniario para la satisfacción de las necesidades fundamentales de los miembros de la familia. En este sentido, los proyectos a que hice alusión y que son los antecedentes argentinos en esta materia —los de los doctores Peco y Coll y Gómez—, siguen, en principio, la misma tesis.

El proyecto de Peco es, a este respecto, terminante. Nuestro proyecto habla de substraerse a la prestación de los medios indispensables para la subsistencia. En términos diferentes, pero con un sentido que estimo estrictamente igual, el artículo 211 del proyecto de Peco, determina que el acto incriminado es el de no prestar, sin justa causa, los medios de subsistencia, a los cuales no califica, como el proyecto que estamos considerando, de medios «indispensables» de subsistencia.

El proyecto de Coll y Gómez usa el mismo término de este proyecto de ley en cuanto a la omisión, o sea recurre al término substraerse y habla en un sentido amplio, que podría dar lugar a la aplicación de la doctrina italiana consagrada por el Código de Rocco. No especifica, como es indispensable en una ley de este orden, que sólo se refiere, como pareciera ser la intención, a los deberes de asistencia económica.

Entrando a pormenorizar sobre diversos aspectos del proyecto debo destacar —siempre en este orden comparativo— que este proyecto establece la pena privativa de libertad de un mes a dos años, o multa de 500 a 2.000 pesos. El proyecto Peco fija en forma absolutamente idéntica al tipo de sanción. Y en el proyecto de Coll y Gómez —en mi concepto con criterio equivocado— se establece la pena de multa para los casos que en verdad son los más graves: aquellos de incumplimiento de los deberes de asistencia de los padres a los hijos, de ascen-

dientes respecto de los descendientes y de descendientes respecto de los ascendientes; y reserva la pena de prisión —que la hace un poco más severa, de seis meses a dos años— al caso del marido que dejara de prestar la debida asistencia económica a su mujer.

En cuanto al sujeto activo y al sujeto pasivo del delito, podemos establecer esta concordancia: en el proyecto que consideramos se establece, en primer término, la incriminación cuando el cumplimiento de deber de asistencia es del padre respecto del hijo menor de 18 años, o de más edad si estuviera impedido. Peco establece el mismo matiz del delito, pero ha omitido incluir a los hijos mayores de 18 años que se encuentran impedidos, que en verdad no están sino en la misma situación que un menor de 18 años. Lo mismo ocurre con el proyecto Coll y Gómez.

El proyecto se refiere luego al caso del hijo en relación al padre impedido. En tal sentido, el proyecto del doctor Peco, en forma más extensa incluye el descendiente en relación al ascendiente. Lo mismo el proyecto de Coll y Gómez.

Naturalmente, estos proyectos no incluían en el delito al adoptante en relación al adoptado, por no estar entonces aprobada la ley de adopción.

También incluyen el caso de los cónyuges entre sí.

Cabe destacar que en lo que se refiere a la obligación de asistencia económica entre cónyuges, el proyecto de Coll y Gómez sólo incrimina el caso en que el marido dejara de prestar asistencia a su mujer. Ya he señalado que, conforme a la nueva Constitución y a la buena doctrina, dentro de la situación de igualdad jurídica de los cónyuges, no hay razón alguna para establecer esa desigualdad con respecto al marido.

La omisión del cumplimiento del deber de asistencia económica es el caso de incriminación a que propende el proyecto que tratamos. Pero lo que se sanciona no es el acto meramente omisivo, que no es incriminable por ese solo hecho, sino cuando concurre el dolo, elemento esencial en todo delito, o sea la conciencia y la voluntad de cometer una omisión antijurídica.

Por lo demás, en todos los supuestos del proyecto, el sujeto pasivo del delito, o sea la víctima, debe encontrarse en situación de necesidad, de indigencia, con lo que se aleja el riesgo de que llegue a castigarse la no prestación de esta ayuda a personas que tengan medios de subsistencia. Señala claramente el mensaje del Poder Ejecutivo que si la persona obligada a suministrar esos medios de subsistencia no se halla en condiciones de prestar ayuda, su conducta no es punible; pero sí existe responsabilidad cuando la persona obligada está en condiciones de sub-

venir a las necesidades de la otra parte, y no lo hace.

Al dar forma a este proyecto de ley, nos apartamos, señor presidente, del modelo que propuso la Conferencia para la Unificación del Derecho Penal celebrada en Madrid en 1933. El texto que aprobó aquella conferencia, como recomendación a todos los países, era substancialmente muy semejante al hoy derogado Código Penal italiano de 1930. Se refería no sólo a los deberes de asistencia económica, sino también a los de asistencia moral.

Nosotros, al votar este proyecto restringiendo la incriminación a la asistencia económica, vamos a sancionar objetivamente el caso de omitirse esa prestación de medios indispensables.

Hay que destacar, señor presidente, que no se trata meramente de sancionar el incumplimiento de la obligación civil de la prestación de alimentos. Se habrá advertido que este proyecto circunscribe, por una parte, el ámbito de aplicación a un núcleo de personas que no son todas las obligadas por el derecho civil a prestar alimentos. Y en cuanto a la objetividad de la obligación, también hay que señalar terminantemente que la prestación de los medios indispensables no es la obligación civil del alimentante, porque los alimentos en el Código Civil comprenden no solamente la habitación, el alimento. Y en cuanto a la objetividad de la también otras obligaciones accesorias pero que hacen a la personalidad del beneficiario, como son los gastos de instrucción, etcétera.

Podría objetarse que este proyecto crea obligaciones que no estaban previstas por el Código Civil, a cargo de los tutores, curadores y guardadores. En este sentido, el mensaje explica con claridad que la obligación nace ahora de la ley penal, cuyo sentido social va mucho más lejos, por cierto, del que tenía el Código Civil, en la época de su sanción, en cuanto se refiere a la obligación de los tutores, curadores y guardadores.

Finalmente, señor presidente, hay que considerar que al escoger el proyecto el verbo «substraer» en su sentido reflexivo, está indicando la omisión voluntaria, el hecho de esquivar el cumplimiento de una obligación. A este respecto, no está de más recordar la definición que da la Real Academia a dicho verbo en su sentido reflexivo. Dice así: «Separarse de los que es de obligación, de lo que se tenía proyectado o de alguna otra cosa».

Para no abusar de la atención de la Honorable Cámara, y sin perjuicio de hacer algunas consideraciones cuando, aprobado en general este proyecto, se entre a tratar diversos aspectos particulares del mismo, deseo repetir que he querido expresar mi opinión como miembro de esta comisión que lo despachó por unanimidad, porque tengo el convencimiento de que esta ley, que sin duda va a ser votada afirmativamente,

constituirá un instrumento eficiente para robustecer la familia argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Bonazzola. — En la interesante «exposición de motivos» del proyecto de Código Penal del doctor José Peco, y en el título único de «Delitos contra la familia», se establece que ésta debe ser tutelada en su formación, en su pureza, en su descendencia y en sus necesidades materiales. El quebrantamiento de estas normas dan lugar, según su autor, a los delitos contra el matrimonio, contra la pureza familiar, contra el estado de familia, contra la patria potestad, tutela o curatela, y contra el cumplimiento de los deberes de asistencia. Precisamente versa sobre este último punto el proyecto de ley que consideramos.

El Poder Ejecutivo se refiere a «delitos de incumplimiento de los deberes de inasistencia familiar», y el doctor Peco, en el capítulo 49, en la parte de delitos contra la asistencia familiar (artículo 211) se refiere a «incumplimiento de los deberes de asistencia económica».

El mencionado artículo dice: «Al que sin justa causa no prestare, aun sin mediar sentencia judicial, los medios de subsistencia al menor de 18 años que se encuentre bajo su patria potestad, tutela o guarda, o ascendiente inválido o necesitado, o al cónyuge indigente no separado legalmente por su culpa, se le aplicará privación de la libertad de un mes a dos años, o multa de 500 a 2.000 pesos. La misma sanción se impondrá al curador que no prestare asistencia al incapaz. La acción es privada.»

Cuando la Comisión de Legislación Penal, durante los años 1946 y 1947, estudió a fondo el proyecto de 1941 del doctor Peco, produciendo despacho favorable, como miembro integrante de dicha comisión, tuve el honor y la satisfacción de colaborar en él y firmarlo. El proyecto que debatimos por el espíritu que lo anima tiene gran semejanza con el del doctor Peco, y es por eso que lo apoyaré con toda conciencia y responsabilidad. Lo contrario sería incurrir en contradicción.

El proyecto crea el delito de incumplimiento de los deberes económicos de asistencia. Este delito no aparece previsto por el Código Penal argentino, ni figura tampoco en nuestros antecedentes legislativos. Por otra parte, cuenta con exigua bibliografía nacional. Por primera vez, lo considera el proyecto de 1937, de Coll y Gómez, como muy bien lo expresa el ilustrado doctor Eusebio Gómez.

Dos son los artículos que a este delito consagra el aludido proyecto: el 148 y 149, que me permitiré leer.

Dice el artículo 148: «Se impondrá multa de 100 a 2.000 pesos, al padre, madre, tutor o guardador que se substraiga al cumplimiento de sus

deberes de asistencia para con el menor de menos de 18 años que se encuentre bajo su patria potestad, tutela o guarda. La misma sanción se impondrá al curador que no prestare asistencia al incapaz; y al descendiente que no cumpliera la obligación de prestar alimentos a su ascendiente, aunque no mediare sentencia que lo condene a ello».

Y el artículo 149: «Se impondrá prisión de seis meses a dos años al marido que, aun sin mediar sentencia que lo condene a ello, se substraiga a sus deberes de asistencia a la mujer, si ésta se hallare en la indigencia o sin más recursos que los indispensables, provenientes de su trabajo personal».

El doctor Eusebio Gómez, en su *Tratado de Derecho Penal*, refiriéndose al proyecto de 1937, comparado con el conjunto de hechos que prevé el código italiano, expresa que las finalidades del proyecto argentino son más limitadas. Por otra parte, dice, no se orientan precisamente en el sentido de la protección a la familia, como el referido código, sino de protección a la persona. De ahí su colocación, en dicho proyecto, en la clase de los delitos contra las personas.

El mismo doctor Eusebio Gómez transcribe un juicio del doctor Ernesto J. Ure, que estudia esta parte del proyecto argentino de 1937, en una interesante monografía en que dice: «Si la incriminación contenida en él no es una creación, dada la forma en que se ha encarado, ofrece la particularidad y el mérito innegable de apartarse de los modelos conocidos.» En cualquier forma, en lo que no cabe duda, es que a «diferencia de la legislación italiana y suiza que lo clasificaban entre los delitos contra la familia, el proyecto de 1937 se ocupa de él entre los delitos contra las personas», según el doctor Peco, quien agrega:

«En tanto, el abandono de un menor o incapaz es un delito contra las personas, el incumplimiento de los deberes de asistencia económica es un delito contra el orden de la familia.»

Bien se ha dicho que ni las reglas del derecho civil han de privar sobre las exigencias perentorias de la vida; y siendo así, diré con el gran tratadista de derecho penal que la ley no debe desinteresarse de la abdicación de las obligaciones impuestas por la moral y exigibles por el derecho. La injerencia del Estado en el seno de la familia, se objeta, es más perjudicial que beneficiosa. Y continúa afirmando que la ley —se arguye— no debe penetrar en las intimidades del hogar para sancionar hechos solucionables por el derecho civil. Sin embargo, principios de humanidad aconsejan la incorporación de este delito. El derecho penal acude en socorro de la persona desamparada atendiendo a la conveniencia de exigir el cumplimiento de estos deberes. La experiencia alecciona acerca de la insuficiencia de las sanciones civiles para el

incumplimiento de las obligaciones de asistencia económica, y de ahí la necesidad de acudir a las sanciones penales.»

Puede decirse que hay una legislación generalizada respecto de este delito de omisión. Ya ha hecho referencia de algunos el señor diputado Conte Grand. En el proyecto del doctor Peco se citan el de Holanda, en su artículo 255; el de Noruega, en el artículo 219; el de Polonia, artículo 201; el de Dinamarca, artículo 213; y en las leyes de 12 de junio de 1922 y 31 de marzo de 1926. También lo incluyen en el elenco de los delitos Bélgica, Letonia, Italia Suiza, Alemania, Rusia e Inglaterra, ésta por ley del 21 de diciembre de 1928; Nueva Zelandia por la ley de 11 de noviembre de 1910, y otros que enumera. En Norte América, también, en algunos Estados.

Los fundamentos tan humanos que inspiran el proyecto y también respetables argumentos legales, me inducen a dar el voto favorable a esta iniciativa en sus alcances generales, dejando a salvo que en particular caben algunas objeciones. ¡Muy bien!

Sr. Presidente (Dri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Filippo.— Señor presidente: deseo enunciar también mi opinión respecto del proyecto de ley que está a consideración de la Honorable Cámara.

Por esta ley, clama, desde la constitución de la Iglesia Católica, el corazón de todos los cristianos del mundo.

Nuestra Constitución Nacional ha dado un paso más en la precisión, en la adaptación de los principios universales, cristianos, humanos, para socorrer las necesidades de la familia, que, como sabemos, con el Estado y con la Iglesia, constituyen las tres sociedades de derecho mediante las cuales va progresando lo que llamamos la civilización cristiana.

La familia es una sociedad de derecho natural que se apoya en la unión entre los cónyuges. Desgraciadamente, esta sociedad de derecho natural que se apoya en la unión de los cónyuges no siempre ha sido amparada por los Estados en la forma debida. Nosotros comprobamos, señor presidente, que donde el espíritu del Evangelio, que es el código supremo de moral, no constituye, no digo las leyes, pero sí el espíritu de las leyes de las naciones, donde este Evangelio no influye con su espíritu, poco a poco van decayendo todas aquellas instituciones que constituyen la formación sólida, los instrumentos, los resortes necesarios para el progreso de una sociedad culta.

Es base de la sociedad civil la familia. ¡Cómo no hemos de preocuparnos, entonces, en hacer que las leyes amparen y protejan lo que es principio de la sociedad, de la Nación y del Estado!

Como muy bien ha dicho el señor diputado Conte Grand, antes que el Estado, antes que la sociedad, está la familia. Nada más lógico entonces que nos esforcemos en ampararla, porque cuanto más favorezcamos y protejamos a la familia, conforme lo señala nuestra actual Constitución en el artículo 37, tanto más trabajamos de manera positiva y eficaz para que la sociedad perciba mayores beneficios.

Por la familia entramos en la sociedad civil. La familia se ve así reglada por la reciprocidad de derechos y de deberes entre los cónyuges y entre los padres y los hijos.

En orden al bien común— debemos advertirlo— la familia queda subordinada a la sociedad y al Estado. Como todos los señores diputados están contestes en admitir, la familia tiene derechos porque existe antes que la sociedad y que el Estado. Pero ¿queda enteramente desligada del Estado y de la sociedad? No, señor presidente. En orden al bien común, la familia se subordina a la sociedad civil, mediante las leyes del Estado, que han de ser justas, para ser leyes que han de obedecerse. Esa sociedad de derecho natural queda subordinada a la entidad que llamamos el Estado en orden al bien general.

Nosotros admitimos que la unión entre los cónyuges es indisoluble, que hay entre los cónyuges igualdad en unos aspectos y desigualdad en otros, que hay diversas actividades, que el padre es quien gobierna la familia. Admitimos los derechos de los padres y sostenemos los deberes de los padres para con los hijos. Recíprocamente admitimos los derechos y los deberes de los hijos para con los padres.

Dios ha dado a la familia principios de vida, de autoridad y de educación. Pero desgraciadamente esos principios son muchas veces minados con facilidad, no sólo precisamente por vicios, ignorancias, debilidades o defectos personales, sino por orientaciones filosóficas, por escuelas malhadadas, cristalizadas hoy en principios incorporados a constituciones de algunos Estados.

No sólo hay escuelas políticas y filosóficas que han propugnado la ruina de la familia y de sus principios de vida, de autoridad y de educación, mediante la propaganda nefasta en escritos infames tendientes a derribar y aniquilar esa célula social, sino que hay Estados que hasta han prescindido de aquellos principios básicos que son esenciales para la civilización.

Respecto de los principios de vida hemos visto cómo se han propalado sistemas que quieren aniquilar al ser humano en el claustro materno, en nombre de la ciencia, de la economía o de la filosofía política. Nosotros, que condenamos tales abusos contra la existencia del ser humano, con mayor razón hoy queremos castigar a aquellos que se apartan de las leyes establecidas por derecho natural en toda sociedad familiar y pretenden deshacer ese núcleo organizado.

La familia es principio de la sociedad. Nada más lógico, entonces, que trabajemos para que los padres no abandonen a sus hijos, recordando que Dios les ha puesto un rayo de luz sobre su frente, de autoridad que debe ser respetada, y está escrita en el Decálogo, que dice: «Honrarás a tu padre y a tu madre». Nada más lógico, entonces, que en defensa de ese principio de autoridad trabajemos para que los padres jamás claudiquen de este trono donde Dios los ha puesto y no olviden que si quieren ser respetados, deben respetar.

Además, decíamos, hay en la familia un principio de educación. Un hombre se forma con barro de cualquier parte, pero no se educa sino a fuerza de sacrificios, de trabajos y de ejemplos; más que de palabras, de obras. Por esto nosotros queremos condenar como delincuentes a todos aquellos que habiéndose comprometido delante de Dios, de la sociedad, de la familia y del Estado, jurando constituir un hogar, defenderlo y hacerlo prosperar dentro de las leyes civiles, morales y religiosas, en fin de cuentas lo abandonan, lo mismo a los cónyuges que se abandonan recíprocamente, como los padres que desconocen a los hijos, o éstos a aquéllos.

Hay un derecho inalienable que no puede descuidarse. La misión que Dios ha dado a la familia es no solamente crear, sino también educar a la prole. Nosotros no queremos que este derecho sea exagerado ni descuidado.

A veces los padres pueden ser déspotas con sus hijos; pero hemos visto y comprobamos —y esto es lo que consideramos— que muchas veces el abandono de la familia se produce por sibarismo, por sensualidad, no sólo por debilidad, sino también por defecto al cual uno se ha constreñido en virtud de los principios destructores que ha ido almacenando en su alma.

Nosotros no queremos que ningún derecho descuide otro derecho. Por eso queremos que sea punible como un delito el abandono que los padres hacen de sus hijos, que los esposos hacen de sus esposas, que los hijos hacen de sus padres.

¿Cuál es el primer ambiente natural necesario para que la educación sea eficaz y duradera? ¿Podemos exigir otro ambiente más natural que el de la familia? Si castigamos a los infractores a las leyes en el orden secundario, ¿cómo no vamos a castigarlos en el orden primario? ¿Adónde va ese esposo o ese padre de familia? ¿Dónde va a recibir mejor el alimento que necesita en su situación precaria, si no lo recibe de las manos de su esposa o de sus hijos? ¿Dónde sus hijos van a recibir con más suavidad los cuidados que necesitan, dónde van a tener mejor protección si se alejan de los padres? ¿Cómo van a amar a sus semejantes quienes han visto que ni sus propios padres les han amado?

El primer ambiente natural es la familia, dije; y es el primer ambiente necesario. Es, pues, de necesidad, de derecho natural. No hablamos ni en nombre de la fe ni en nombre de una teoría política; hablamos, sencillamente, en nombre de las tendencias ingénitas del ser humano.

La primera maestra del niño es la madre, y es el padre el primer sargento instructor. El hijo va copiando, hasta en el andar, la modalidad del padre, y si el padre lo abandona, ¿dónde encontrará una educación eficaz? Y no solamente eficaz, sino, y voy pesando las palabras, duradera.

Es necesaria que esa educación sea duradera. No basta que se le dé el ejemplo un día, un mes o un año. Mientras la madre lo va amamantando, el niño va aprendiendo, en el reflejo de su sonrisa, las primeras palabras, y va grabando en forma indeleble en su espíritu, como en una tabla rasa, aquellos principios de los cuales no se olvidará jamás. Podemos reírnos y hasta ultrajar esos principios, pero con ellos, ya envejecidos, nos hemos de encontrar en los vericuetos de la vida.

El Estado debe, entonces, proteger sin absorber ni suplantar los derechos de la familia, con una legislación tan magníficamente planeada como la que estamos considerando.

¿Cuándo debe el Estado amparar sin suplantar ni absorber los derechos de familia? Simplemente cuando falla física o moralmente la obra de los padres. No son éstas palabras más, sino de un pontífice romano. Poco ha enunciaba este principio un Papa, Pío XI, cuando recordaba que debe protegerse física y moralmente a la familia, cuando falla la obra de los padres.

¿Y de qué tratamos, señor presidente, en este proyecto de ley? Entiendo que todos, unánimemente, coincidimos en que, cuando fallen no sólo voluntaria o erróneamente, sino voluntaria o culpablemente los hijos o los padres en el cumplimiento de sus deberes, debe ir el Estado, como entidad moral, a proteger los derechos olvidados o pisoteados por unos u otros.

Por esto, señor presidente, he querido hacer oír mi voz, a fin de que todos convengamos en que este proyecto de ley va a ser una de las estrellas brillantes que han de iluminar nuestra Patria, amparando la debilidad de la primera sociedad, la debilidad de la más eficaz y necesaria de las sociedades de la Patria, cual es la familia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Beretta. — Señor presidente: voy a considerar este asunto en representación de mi bloque bajo un aspecto más bien general, dado que los miembros informantes de la comisión lo han hecho bajo un aspecto jurídico.

En virtud del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, se crea un nuevo delito. Se imponen sanciones penales al incumplimiento de ciertos deberes familiares de asistencia económica. En efecto: el padre, el adoptante, el tutor, el guardador, el curador, así como el hijo, el adoptado y el cónyuge, que en determinados casos se substraieren a la prestación de los medios indispensables para la subsistencia, incurrir en el delito que se crea y son pasibles de las penas que para el mismo se establecen.

¿Qué finalidad ha tenido el Poder Ejecutivo al enviar este proyecto? Consolidar, fortalecer el vínculo familiar.

El Estado no es sino la organización jurídica de núcleos de familia. Es indispensable fortalecer el núcleo familiar para que el Estado se afiance y fortifique. Más aún: no podría, hasta cierto punto, haber homogeneidad en el Estado si no la hay en los distintos centros familiares. El Estado no vendría a ser en la manera de orientar su acción a los fines sociales, sino la resultante de la manera de estar constituida cada una de las células familiares.

Es, pues, lógica la preocupación por sancionar leyes que velen por la organización de esta célula, célula que tiene su razón de ser fundamental en lo que respecta a la raza.

Aquí se citó, y se citó bien, a Peco, quien en su proyecto de Código Penal va más allá en cuanto en su proyecto establece un delito respecto de la pureza familiar. Se trata de velar por la célula familiar, por el vínculo de la sangre, que es vehículo de sentimientos elevados, afectivos. Alguien dijo, con razón, que es en el seno de la familia, que es en las rodillas de la madre donde se forma lo más noble y grande: un hombre honesto. Para proteger ese vínculo y para fortalecer la familia viene este proyecto, que establece sanciones penales para los padres que no cumplen sus obligaciones con sus hijos, y de éstos con respecto a los padres, etcétera.

Podrá discutirse con respecto a la extensión de las personas que deben ser comprendidas dentro de esta sanción; si deben estar comprendidos los tutores, guardadores o curadores; si se trata de un delito de familia o de las personas; podrá discutirse el carácter de la asistencia; pero bajo ningún concepto podrá discutirse la necesidad imperiosa de contribuir, por medio de sanciones penales, a la fortificación de este núcleo familiar.

Como lo expresa el mensaje, esta iniciativa no es nueva. En casi todas las legislaciones europeas, y también en varias naciones americanas, existe la incriminación de este delito por incumplimiento de los deberes de familia. Como se ha dicho también en esta Cámara no es una cuestión nueva entre nosotros, puesto que hay antecedentes legislativos.

Se ha citado, por parte del señor diputado Bonazzola, el proyecto Coll-Gómez, que asimismo establece esta sanción. También se ha hecho mención del proyecto Peco y de otras monografías que constituyen antecedentes importantes. El Poder Ejecutivo, pues, no viene a innovar. Pero quiero dejar asentada mi opinión personal: si este proyecto de ley hubiera sido enviado en 1943, yo hubiera dicho que era inoportuno, porque los que hemos conocido especialmente el interior de la República hubiéramos expresado que, antes de establecer sanciones sobre el cumplimiento de los deberes de asistencia de los padres para con sus hijos, y de éstos para con aquéllos, era menester proteger a la familia desde el punto de vista económico.

Todos sabemos que en aquella época se cobraban salarios de dos o tres pesos, trabajándose dos o tres días por semana. Entonces ¿cómo se iba a dictar una ley de esta naturaleza sin aumentar previamente los salarios, protegiendo la familia desde el punto de vista económico?

Quería destacar esta circunstancia de oportunidad en la presentación de este proyecto por parte del Poder Ejecutivo, porque era previo elevar, como se ha hecho, los salarios de los jefes de familia y crear fuentes de recursos para los integrantes de la misma, vale decir, poner a la familia argentina previamente en condiciones económicas capaces de poder cumplir con los deberes que ella impone.

Celebro que este proyecto haya sido enviado en estos momentos, y lo celebro porque el proyecto concuerda con principios claros y definidos del movimiento peronista, esculpidos con trazos fuertes en la Constitución nacional, como son los de proteger, vigorizar y afianzar la familia argentina sobre el vínculo de la sangre.

El clima favorable creado por el movimiento peronista ha hecho fácilmente viable la sanción de leyes que, como las del instituto de la adopción, han tenido rápida sanción por parte de esta Honorable Cámara.

Con estas palabras dejo expresado el sentir y el pensar de nuestro bloque sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en la inteligencia de que tiende a consolidar una de las instituciones básicas del Estado, cual es la familia, núcleo fundamental de nuestra sociedad, célula constitutiva del Estado, que no es sino, como dije al principio, la organización jurídica de un grupo de familias. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Rojas (A.). — Señor presidente: pensaba no hacer uso de la palabra en un asunto en el que no hay ni puede haber discrepancia. Pueden surgir divergencias de detalle, de forma, algunas restricciones, algunas precauciones, de las que nos ocuparíamos en la discusión en particular; pero en el fondo, en sus líneas generales, no puede haber disidencia: la prestación de alimentos se presta a mil dilaciones, y ha llegado la hora de crear sanciones penales. Pero ciertas manifestaciones que ha hecho el señor miembro informante de la mayoría, amplificadas por el tono todavía más pleonástico del señor diputado Filippo, me obligan a decir algunas palabras.

Se me ha ocurrido pensar que si, por una casualidad, hubiera llegado hoy a las galerías de esta Cámara algún turista desprevenido, al oír esas manifestaciones pensaría que en la República Argentina no ha habido ni familia ni leyes de protección a la misma hasta que se dictó la Constitución justicialista. Creería, no sin gran sorpresa, que hasta la familia es un invento del peronismo.

Sr. Conte Grand. — Mis palabras no pueden tener esa interpretación. Es una observación muy ligera la del señor diputado.

Sr. Rojas (A.). — Cualquiera que conozca someramente nuestra legislación, sabe que esto es absolutamente inexacto.

Sr. Visca. — En su mensaje, el Poder Ejecutivo ya lo dice. No está descubriendo nada el señor diputado.

Sr. Rojas (A.). — Ya leerá la versión taquigráfica de los discursos...

Sr. Visca. — No voy a leer el discurso del señor diputado...

Sr. Rojas (A.). — El Código Civil tiene largas disposiciones relacionadas con el orden y el mantenimiento de la familia. Esta misma obligación de alimentos está reglamentada en el Código Civil. Hay aquí matrimonio y patria potestad, y tutela, etcétera, y régimen sucesorio, instituciones todas tendientes a la consolidación y al ordenamiento de la familia. Digamos también que en el Código Penal está prevista la organización y la subsistencia de la familia, mediante un sistema represivo...

Sr. Visca. — También lo está en los mandamientos.

Sr. Rojas (A.). — ...como las penas para la bigamia, para el abandono de los hijos menores, para el infanticidio y otras formas de actos dolosos, que constituyen lesiones a esa institución fundamental que es la familia.

Tampoco esta ley es nueva, como lo han confesado los señores diputados de la mayoría, que han debido reconocer, a pesar de sus laudatorias, que existen proyectos relacionados con este mismo asunto, y algunos de ellos de un diputado de nuestro sector, el ex diputado Peco, desde hace muchos años.

Sr. Beretta. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Rojas (A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Beretta. — Es exacto lo que dicé el señor diputado, pero lo que no va a poder desvirtuar es lo siguiente: que muchos de los proyectos, como por ejemplo el de adopción —a pesar de haber existido desde los tiempos de los romanos—, ha tenido que ser precisamente este Parlamento el que los haya llevado a la práctica, porque este movimiento ha creado el clima propicio para hacer posible el afianzamiento a que se refiere el señor diputado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Rojas (A.). — Reconozco que en el caso de la adopción, *ab initio*, el origen de la ley proviene de un proyecto del señor diputado, pero reconocerá que la ley sancionada no se asemeja en nada a su proyecto, que se reducía a las formas primarias de la beneficencia y de la protección a la orfandad, y que la ley que se dictó fué obra de la Comisión de Legislación General, donde trabajaron principalmente diputados que no eran del sector peronista, entre ellos el ex diputado Díaz Colodrero, demócrata nacional, y el actual diputado Yadarola.

Sr. Conte Grand. — No puede negar que la mayoría del actual Parlamento es la que considera el asunto.

Sr. Rojas (A.). — Una de las características de la etapa jurídica primitiva es la confusión de límites entre lo que se llama una deuda dolosa, que corresponde a los dominios del derecho criminal, y una deuda puramente civil. Precisamente, una de las cosas que abolió la Revolución Francesa fué la prisión por deudas.

Un caso como éste se encuentra en la frontera de lo que constituye una deuda civil, que puede llegar a ser deuda criminal. El peligro de una ley de este tipo es, precisamente, que se pase de la frontera y se convierta en delito deudas que son puramente civiles. Por eso considero que al tratar en particular el proyecto habrá que establecer claramente ciertas restricciones, porque de lo contrario, esta ley se convertirá en una fuente de abusos, y aun en motivo de disociación de la familia.

En el caso corriente del hijo menor que por desgracia para los padres sale descaminado, de acuerdo con esta ley él puede colocar a sus padres en situación de procesados, simplemente porque su mala conducta lo ha llevado a un distanciamiento con sus progenitores. Es conocida la experiencia dolorosa de los padres que se empeñan en rectificar a hijos descarriados. Esta ley, tal como está redactado el proyecto, se prestará a aplicaciones abusivas.

Asimismo, habrá que establecer claramente que la falta de cumplimiento de esta prestación debe ser maliciosa y carecer de justificación, es decir, que no se trata de un delito culposo, sino

de un delito típicamente doloso, y esto debe establecerse como requisito especial para su configuración de manera expresa.

Igualmente, debe determinarse con toda claridad que se trata de un delito de acción privada o, en todo caso, de instancia privada. El afán de proteger el orden de la familia puede llevar, precisamente, a convulsionarlo, a pervertirlo y a perturbarlo. Este es el motivo por el cual ciertos delitos privados están exentos de la acción de la justicia mientras no haya incitación de los padres, como sucede, por ejemplo, en el rapto y en el estupro. Estos no son delitos de acción pública, porque si lo fueran perturbarían, precisamente, la paz de esa familia que se quiere defender. Los padres pueden tener un interés legítimo y respetable de que no trascienda a la acción pública un desliz de una hija menor. Este es el motivo por el cual estos delitos no son de acción pública.

El delito a que se refiere el proyecto de ley debe ser calificado claramente como delito de acción privada o por lo menos de existencia privada. La justicia no puede ir a inmiscuirse en los secretos de un hogar, so pretexto de amparar el principio de la estabilidad de la familia. Las cosas íntimas del hogar, de las relaciones entre esposos, el grado en que el esposo cumple con la obligación de subsistencia, con ella y con sus hijos, sobre todo con la esposa, son asuntos de orden íntimo, muy delicados. Solamente deben trascender de la familia cuando uno de los cónyuges pone en movimiento la acción de la justicia. De lo contrario, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Después de estas consideraciones de carácter general; que no afectan a la bondad del proyecto en sí, a lo que llamaré su intención que nuestro sector apoya, me concretaré a considerar ciertas modificaciones indispensables —cuando se trate en particular—, para que los buenos propósitos de la ley no sean desvirtuados en su aplicación.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Cámara en comisión tendrá que resolver qué texto de despacho adopta.

Sr. Bagnasco. — Propongo que se adopte como despacho el texto del proyecto de ley publicado en la orden del día 403.

Sr. Conte Grand. — De acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la indicación del señor diputado por Buenos Aires, de que la Cámara en comisión adopte como despacho el proyecto de ley contenido en la orden del día 403.

—Resulta afirmativa de 71 votos; votan 86 señores diputados.

17

ASISTENCIA FAMILIAR

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda levantada la conferencia.

Se va a votar en general el despacho aprobado por la Cámara en comisión.

— Resulta afirmativa de 75 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración, en particular, el artículo 19.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Señor presidente: he escuchado con toda atención a los señores diputados preopinantes, porque pensaba plantear la inclusión de un nuevo artículo; pero antes de solicitarlo, voy a decir breves palabras, sobre el artículo 19.

Ante todo debo recordar la existencia de un proyecto presentado por el señor diputado Fregossi — que en definitiva no llegó a ser aprobado por la Cámara el año pasado — por el cual se nombra una comisión encargada de estudiar el Código del Niño.

Considero que es necesario establecer un artículo — quizás pueda ser incluido en este proyecto — por el cual se dé fuerza de ley al fundamento de sentencias dictadas en nuestro medio, que justamente han sido tenidas en cuenta en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso.

Mis observaciones se han de referir a la pérdida de la patria potestad. Considero que la pena que se impone por el artículo 19 para el caso de incumplimiento de la asistencia al niño, no puede ser la pena justa para quien, como el caso que conozco y que voy a plantear a la Honorable Cámara, haya dejado de lado la atención de sus hijos.

Es indudable que la vida hay que afrontarla con conciencia, con responsabilidad...

Sr. Rojas (A.). — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Visca. — Sí, señor diputado.

Sr. Rojas (A.). — Las observaciones que está haciendo el señor diputado son muy atinadas; pero ya están previstas en otra ley, de carácter civil, que es la ley de patronato de menores, la que establece la pérdida de la patria potestad por el abandono, por el incumplimiento de ciertos deberes. Aparte de ello, esta ley, que sería incorporada al Código Penal, no debe tener disposiciones relacionadas con la patria potestad, que es de orden civil.

Sr. Visca. — Celebro que los señores diputados doctores Absalón Rojas y Romeo Bo-

nazzola traigan a colación la existencia de una ley que evidentemente no ha sido tenida en cuenta en el caso preciso que deseo exponer ante la Honorable Cámara.

Quiero remozar esas disposiciones de la vieja, anticuada y olvidada ley del patronato de menores...

Sr. Rojas (A.). — Se aplica todos los días en los tribunales.

Sr. Visca. — Se la aplica en los tribunales: es evidente.

Sr. Bonazzola. — Se trata aquí de la creación de un delito, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo el señor diputado.

Sr. Visca. — Quiero que los señores diputados se den cuenta que, si bien soy un lego total en ésta y muchas materias del conocimiento y del no conocimiento de los señores diputados, quiero, en este momento, para mí histórico, que vive el país, de rejuvenecimiento por disposiciones nuevas en la Constitución de la República, por esta tonalidad que nos hace conjugar en el mismo ideal a peronistas y a antiperonistas o radicales y antirradicales, quiero — digo — que la justicia de mi país viva también este momento y escuche la palabra autorizada de los señores diputados, que son, no sé si profesores de derecho, pero sí hombres de derecho, y que escuche también las del diputado que habla, lego en ésta y otras materias, como acabo de decir.

Estoy planteando un caso práctico; estoy manifestando ante la opinión de la Cámara y para que me escuchen los jueces, a quienes van dirigidas estas palabras, que se han dictado muchas sentencias de divorcio a favor de uno de los cónyuges y por la cobardía de los favorecidos y la comodidad de no mantener a los hijos, eluden la responsabilidad de padre o de madre de mantener a los hijos.

Por el propio bienestar y tranquilidad no se asume la responsabilidad que la ley determina, y más que la ley escrita, la ley natural.

Es ésta una obligación señalada en todos los códigos desde que existe la humanidad. ¡Cómo es posible que me convenzan los señores diputados! Estoy frente a una cuestión práctica, de una sentencia de divorcio dictada a favor de uno de los cónyuges y contraria en forma terrible a la otra parte. A pesar de haber transcurrido seis años el cónyuge que obtuvo sentencia por la que se le reconoce como persona de moral, el cónyuge con la sentencia de hombre de bien, no ha sido capaz de aportar un solo peso en una sola oportunidad para hacer valer eso que los señores diputados dicen que ya está en la ley de patronato de menores. Eso es inmoral y debe castigarse.

Es por ello que quería proponer un artículo por el cual se estableciera en el Código Penal, o en el código que los señores diputados entiendan que debe figurar, que la justicia no puede

tomar en cuenta, para seguir fallando acerca de la tenencia de criaturas, lo que se prepara en un expediente inicial, que no se abre jamás por hechos nuevos y lo que ha ido rodando del tribunal de alzada a la Corte para seguir sosteniendo el derecho de ese padre —cuyo expediente está actualmente a sentencia en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires—, a la patria potestad, no obstante que durante cinco o seis años no se ha ocupado de sus hijos, mientras que el cónyuge condenado ha afrontado y cumplido con todos sus deberes.

Por eso, celebro el proyecto del Poder Ejecutivo, así como la palabras de los señores diputados de nuestro sector y del sector de la minoría. Ojalá lleguen hasta los altos estrados de la justicia bonaerense las expresiones de los señores diputados que sostienen que ese delito ya está castigado, a fin de que se establezca, como ya lo ha hecho una cámara de apelaciones de la Capital, que no es posible que tenga derechos sobre un hijo el padre que durante cinco o seis años lo ha abandonado totalmente a su suerte y a la de la otra parte.

Espero, además, que oportunamente se sancione el Código del Niño, porque es fundamental para la revolución que se respeten los derechos de la familia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — Señor presidente: antes de referirme concretamente al motivo por el cual he solicitado la palabra, me adhiero a algunas manifestaciones formuladas por el señor diputado Visca acerca de la urgente necesidad de que se sancione de una vez por todas el Código del Niño y —como propuso el año pasado el señor diputado Sobral— del Adolescente.

De haber contado con dicho código, tal vez no se habría sancionado alguna ley, como la relativa al campeonato infantil de fútbol, el cual, desde el punto de vista médico y pedagógico, es criminal, por la edad de los participantes.

Espero que este año no acontezca lo ocurrido el año pasado, en que el Código del Niño fué una especie de comodín que se utilizó hasta el final del período sin sancionarlo.

Paso a referirme al motivo concreto de mi pedido de palabra.

Sr. Albrieu. — Por ahí irá mejor que calificando de criminal el juego de fútbol en los niños.

Sr. Monjardin. — El artículo 1º del proyecto contiene una coma peligrosa. He sostenido en oportunidad semejante que la expresión del pensamiento debe ser rigurosamente exacta, sin ambigüedades ni equívocos. El que lea el artículo 1º entenderá que se condena a quien se substraiga al deber de proveer a la asistencia de su hijo menor de dieciocho años, si estuviere impedido, o de más de dieciocho, si también estuviere impedido.

Sr. Conte Grand. — No es así, señor diputado.

Sr. Monjardin. — Para que el artículo diga lo que entiendo que se ha querido decir, debe suprimirse la coma que está después de la palabra «más».

Posiblemente se trate de un error de imprenta y no de redacción, pero de cualquier manera tenemos que salvarlo para evitar la posibilidad de interpretaciones equívocas o malévolas.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fregossi. — Señor presidente: este mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que está considerando la Honorable Cámara, constituye una de las iniciativas de mayor trascendencia social que hayamos considerado en los últimos tiempos.

Tanto la exposición doctrinaria que la fundamenta como el articulado que traduce positivamente la necesidad de las normas complementarias del Código Penal que se auspician, expresan con claridad las razones imperiosas que demandan su sanción.

Si «los códigos representan la exteriorización del derecho en un momento de la evolución de los pueblos», es innegable que muy pocas veces podría hacerse resaltar con mayor nitidez este reclamo como en estos tiempos en que la ley fundamental de la Nación pide un mesurado y sólido equilibrio para el ordenamiento social y político de nuestra patria.

No hay, en efecto, ningún problema de la interdependencia social argentina que pueda escapar a la recia reconstrucción nacional en que nos hallamos empeñados y si, como lo expresara con alta sabiduría la Unión Internacional de Estudios Sociales de Malinas, «siendo como es la familia la fuente de donde recibimos la vida, la primera escuela donde aprendemos a pensar, el primer templo donde aprendemos a orar, hay que combatir todo lo que la destruya o la quebrante, hay que alabar y estimular cuanto favorece su unidad, su estabilidad y su fecundidad».

Es por ello que siento tan grata comodidad en mi corazón, señor presidente, al dar mi voto favorable para la aprobación del proyecto de ley en debate; iniciativa que propicia la solución inmediata, desde el punto de vista penal, del problema de la asistencia familiar, en concordancia con la sabia orientación doctrinaria que ilumina la Constitución nuestra, en el articulado que asegura los deberes irrenunciables de la organización de la familia.

El pensamiento rector de la civilización cristiana, que ha cimentado incommoviblemnete la tradición nacional que nos enorgullece, nos está señalando sabiamente que los sentimientos de la fraternidad alentadora y la dignidad humana se tornarian formulismos estériles y opacos si

no tomaran su firme asidero en la unidad indestructible de nuestras familias.

La sabiduría humana y las enseñanzas de la civilización deben prever, en cuanto sea permitido a las cavilaciones de los estudiosos, adecuados principios que impidan su desunión. Pero cuando ello acontezca, especialmente en pueblos jóvenes como el nuestro, cuyos elementos heterogéneos van amoldándose gradualmente a nuestra plenitud nacional, el Estado debe procurar de inmediato un medio de protección que afiance esa unidad, la favorezca con el cumplimiento inexcusable de los deberes que impone la asistencia familiar y prolongue el espíritu de familia hasta los desvalidos y los tristes que no tienen por qué avecinarse al ocaso de sus vidas temblorosos de tristeza, en estas tierras en que se doran los trigales, mientras nos mira Dios.

Albergo la confiada esperanza de que las sólidas exposiciones jurídicas que afianzarán la sanción de este proyecto, concordarán con el voto que doy por su aprobación, aprobación inspirada en necesidades sociales semejantes a otras que en unión de mis distinguidos colegas señores José Emilio Visca y Angel J. Miel Asquía, me he honrado propiciando en este mismo recinto, como es el proyecto de resolución sobre nombramiento de una comisión especial para que estudie y redacte un proyecto de Código del Niño.

Las normas legales del nuevo derecho facilitarán así la felicidad del pueblo, proporcionando a los resortes judiciales medios adecuados para encausar los desbordamientos inicuos que puedan originar la disolución del núcleo familiar.

Sé que mis honorables colegas comparten estas inquietudes, en su orientación esencial. No es extraño, entonces, que el diputado que habla aguarde confiadamente su comprensiva conformidad hacia su sincero propósito, porque al abreviar el tiempo necesario para la aprobación de este proyecto, abreviamos el sufrimiento y el dolor de quienes aguardan el amparo de nuestras leyes humanitarias y justas. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Zavala Ortiz. — Como se ha dicho en este recinto, hay unanimidad de criterio para encarar la represión del abandono de los hijos por los padres. Pero tan buen propósito no es posible que se malogre y que pueda prestarse, incluso, a maniobras y a procedimientos incorrectos de parte de algunos interesados en obtener soluciones deleznales.

Por eso, no obstante que la redacción del proyecto ya es clara —lo confieso— al emplear el verbo substraer, que significa un acto voluntario, no estaría de más, para evitar se consumen maniobras perjudiciales para la moral y el prestigio de la familia, que es lo que se desea tutelar en primer término, hacer algún agre-

garlo para fijar más la intención o la *ratio legis*.

Al respecto ya hay antecedentes. El código de Noruega, por ejemplo, dice «intencionalmente». El proyecto del eximio penalista argentino Peco emplea la expresión «sin justa causa», que fundamenta en los términos que me permitiré leer: «La obligación de asistencia económica presupone la posibilidad de satisfacerla, de manera que no es sancionable la imposibilidad de cumplirla. También el titular de la obligación, a pesar de la capacidad para ejecutarla, no incurre en delito si no la cumple por causas imputables al beneficiario, como la vida disoluta de la mujer. Consultando ésta y otras circunstancias, el proyecto no somete a sanción alguna a la persona que con justa causa deja de prestar los medios de subsistencia.» Esta cuestión se hará aún más notable cuando consideremos el inciso d) del artículo 2º en lo que respecta a la prestación de alimentos al cónyuge, si se trata de un caso de culpabilidad, sobre todo cuando no hay resolución judicial.

Por eso me voy a permitir sugerir que el artículo 1º diga así: «Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de 500 a 2.000 pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substraieren sin justa causa...», etcétera. Vale decir que se agreguen los términos «sin justa causa», que recomienda el doctor Peco.

Por los motivos que he enunciado, solicito de la comisión que ha formulado este despacho acepte el agregado que propongo.

Sr. Presidente (Cámpora). — El despacho es de la Cámara en comisión, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Conte Grand. — Cuando la Comisión adoptó como despacho...

Sr. Rojas (A.). — Si me permite una interrupción el señor diputado...

Como el señor diputado, en nombre de la comisión, va a dar su opinión en este asunto, le pediría que me permita referirme a la sugestión que ha hecho el señor diputado por Córdoba.

Sr. Conte Grand. — Es la misma que ha hecho el señor diputado anteriormente.

Sr. Rojas (A.). — Referente a este mismo reparto.

Sr. Presidente (Cámpora). — Le rogaría al señor diputado que anotara su pedido para usar de la palabra después.

Sr. Rojas (A.). — En síntesis: que se ponga una cláusula general en lugar de un agregado.

Sr. Conte Grand. — Continúo.

En el mensaje del Poder Ejecutivo está claramente expresada la idea de la substracción al cumplimiento de un deber en forma dolosa, maliciosa, o sea, sin justa causa. El verbo, que ha sido usado deliberadamente, en su correcto sentido idiomático, quiere decir eso; y hace unos momentos, cuando informé en general, dije que ése era el sentido y la interpretación que damos

a esa expresión los legisladores que votamos el despacho.

Otras leyes extranjeras que han usado una terminología semejante han sido uniformemente interpretadas en ese sentido. Así, los autores italianos Manzini y Aloisi hacen notar que no se le puede aplicar la sanción a aquel miembro de una familia que, respecto de otro, incurre en el incumplimiento de este deber por causas justificables o por causas que, dentro de las normas generales del código, son de no punibilidad.

Establecer respecto de ese delito, en forma particular, como lo hace Peco, que debe tratarse de una omisión sin justa causa, es introducir un elemento que ya juega dentro de la sistemática del código, cuando éste determina las causas de no punibilidad.

De manera que, en principio, y por el correcto sentido que tiene este proyecto, tal como lo ha concebido el Poder Ejecutivo y lo hemos despatchado nosotros, me parece que no es indispensable que a los términos que emplea se le agregue especialmente el requisito de que debe el agente obrar sin justa causa.

El señor diputado Rojas temía que, en caso de no incluirse esta expresión en el artículo, la sanción penal fuese motivo de abusos en su interpretación. El ejemplo que citó del hijo de mal comportamiento —del hijo descaminado, dijo— es un caso de no punibilidad. Si un hijo se aleja del hogar familiar, y por razones de soberbia, de rebeldía, no acepta la ayuda económica del padre, es de toda claridad que a ese padre no se le puede imponer una sanción penal. Pero si se estima conveniente extremar los recaudos para evitar un abuso, sugeriría que, en vez de las palabras «sin justa causa», se acogiese una expresión de uso constante en el Código Penal, para dar la idea del dolo, de la voluntad criminal: aceptaría que se dijese que «se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substraieren *maliciosamente*, etcétera». Maliciosamente, para calificar en forma precisa el dolo, la voluntad criminal de realizar la omisión del cumplimiento de deberes familiares.

Sr. Zavala Ortiz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Conte Grand. — Si la Presidencia lo autoriza.

Sr. Zavala Ortiz. — Seré muy breve, señor diputado.

Es indudable que la proposición del señor diputado tiende a restringir enormemente el ámbito de la represión. Pero lo que la ley quiere es que toda persona concurra a cumplir las obligaciones familiares. Esa concurrencia es una obligación que se le impone a quien tiene una carga de esta naturaleza. La omisión puede ser hecha por negligencia, descuido o inconciencia familiar. Estos casos también deberían ser punibles, porque no solamente se castiga al padre

que deja en el desamparo a los hijos con malicia, sino también al padre que no cumple con su deber elemental simplemente por inconciencia o irresponsabilidad.

Por eso consideraría más lógica la expresión «sin justa causa» que «maliciosamente».

Sr. Conte Grand. — Insisto en que si se tratara de extremar los recaudos para que esta ley no vaya a ser una fuente de abusos, podemos recalcar que el delito se comete cuando la omisión fuese dolosa.

El señor diputado por Córdoba, que insinuó circunscribir y restringir los efectos de la ley, sugiere ahora que también puede incurrirse en el delito, y por tanto ser pasible de sanción, cuando la omisión es fruto de negligencia o de inconciencia acerca de los deberes de asistencia familiar.

Sr. Zavala Ortiz. — Puede darse el caso de un padre que no quiere trabajar.

Sr. Conte Grand. — Entiendo que dentro del criterio de prudencia que anima a todos los diputados, podemos circunscribirnos a los casos de voluntad maliciosa, si se trata de fijar delimitadamente el ámbito de la ley. El terreno al que quiere entrar el señor diputado es el que, efectivamente, puede tornar muy peligrosa esta ley, porque los casos de inconciencia o negligencia pueden convertirla en un semillero de abusos y de pleitos.

En cuanto a la sugestión que hizo el señor diputado Visca, quien ha señalado una realidad, por desgracia muy general, entiendo que desde el punto de vista legal, la inquietud que le anima está contemplada en este proyecto, el que, por otra parte, está debidamente correlacionado con otras normas jurídicas vigentes.

El señor diputado Rojas hizo alusión, a propósito de la sugerencia del señor diputado Visca, a la ley de patronato de menores. Estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que si esta ley incrimina la falta de cumplimiento del deber de asistencia familiar, aquel de los padres que están comprendidos en esta ley que incurra en el delito que la misma establece, caerá también bajo la sanción de la ley de patronato de menores. Quiero destacar que se trata específicamente del caso del padre o madre que deja de cumplir con su deber e incurre, por lo tanto, en este delito. El artículo 307 del Código Civil, tal como lo modificó la ley de patronato de menores, establece que perderá la patria potestad el padre o la madre por delitos cometidos con sus hijos menores. De manera que aparte de la acción por alimentos, en el caso señalado, existirá motivo concreto para la pérdida de la patria potestad, cuando uno de los padres deje de prestar maliciosamente los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos menores.

Concretando, y a propósito de las observaciones que se han formulado, yo estimo si el espíritu de la Cámara es restringir al máximo el

ámbito de aplicación de esta sanción penal, en vez de consagrar la expresión de que debe proceder el autor del delito sin justa causa —que en mi concepto ya está implícitamente dentro de la dogmática del Código Penal—, debe agregarse al artículo la calificación de «maliciosamente» al referirse al acto de substraerse.

Finalmente, en cuanto a la observación de orden gramatical, que señalaba el señor diputado Monjardin, debo advertir a la Honorable Cámara que al imprimirse la orden del día 403 ha habido un error, pues esa coma que figura en el artículo 19, después de las palabras «o de más», no estaba en el proyecto original y debe ser suprimida, porque de lo contrario cambiaría totalmente el sentido.

Sr. Mercader. — Advierto que el error se ha reiterado en el inciso b) del artículo 29.

Sr. Conte Grand. — Oportunamente lo vamos a salvar, para evitar que cambie el sentido del artículo.

Sr. Presidente (Cámpora). — ¿El señor diputado por San Juan propone que después de la palabra «subtrajeren», que figura en el artículo 19, se agregue el calificativo «maliciosamente»?

Sr. Conte Grand. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Declaro, señor presidente, que este proyecto me deja un tanto perplejo. No me convence la opinión de los penalistas que tal vez por razones de especialización tratan de llevar al campo penal la sanción del incumplimiento de obligaciones como éstas, de carácter familiar y que son típicamente de naturaleza civil.

Ha sido una tendencia característica de los gobiernos totalitarios ir desplazando...

Sr. Conte Grand. — En todo el mundo.

Sr. Visca. — Entonces, el doctor Peco era totalitario.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Yadarola. — No me refiero a la opinión de mis correligionarios ni de los señores diputados peronistas. Estoy exponiendo mi opinión.

He dicho, señor presidente, y afirmo una verdad, que ha sido una tendencia de los regímenes totalitarios ir desplazando las instituciones civiles de derecho privado al campo del derecho público, es decir, dando preeminencia y prioridad al derecho público en las soluciones de los problemas que plantean las relaciones particulares que desde los orígenes del derecho estaban regladas por el derecho privado. Es la tendencia que lleva a extender indefinidamente la intromisión de la autoridad pública en las actividades de la vida humana.

La orientación del derecho positivo argentino ha sido y debe ser otra: el de ser privado man-

tiene su imperio en el amplio cuadro de las relaciones particulares, y en punto a delitos la orientación ha sido la de eliminar la intervención de los parientes en todos los procesos penales. Tan cierto es eso que no se permite la denuncia de delitos de hijos a padres ni de padres a hijos; tan cierto es también que la propia legislación de la quiebra en la República, prohíbe al hijo respecto del padre y a éste respecto de aquél, hacerse declarar en estado de falencia.

¿Cuál es la razón que justifica esta orientación del derecho positivo argentino? Una sola: evitar que estas cuestiones de familia pero de orden puramente patrimonial, puedan desplazarse al terreno penal con grave riesgo de la estabilidad de la familia.

Con esta ley, con la que, según se ha dicho, se quiere amparar a la familia, se va, desgraciadamente, hacia la destrucción de la solidaridad familiar. Irá creando en los hijos la idea de que ellos tienen en sus manos una poderosa arma de sometimiento de los padres; va creando la idea de que dentro del núcleo familiar —que debe constituir una entidad sólidamente afectiva, unida por vínculos espirituales y morales y no económicos—, existe la posibilidad de que el hijo lleve a la cárcel al padre, lo cual no sólo atenta contra la estabilidad y solidaridad de la familia, sino contra los propios principios cristianos que ha invocado un señor diputado del bloque mayoritario.

Afirmo que esta ley, lejos de resolver el problema a que pretende dar solución, va a crear una situación gravísima, llevando las rencillas familiares, que en el orden actual se desenvuelven exclusivamente entre los procesos civiles —que nunca llegan a agravar los vínculos entre padres e hijos—, a un estado que implicará la quiebra de la familia argentina, asentada en profundos principios éticos más que económicos.

En términos generales, he querido dejar bien establecido mi punto de vista personal con respecto a este proyecto; pero además entiendo que hay algunos aspectos particulares que deben ser motivo de aclaración.

Considero que para que haya una sanción de carácter penal, si no queremos trastornar todos los principios en que se asienta la legislación represiva, es indispensable que exista un hecho que se caracterice como delictuoso. De manera que para que un padre pueda ser llevado a los tribunales del crimen por su hijo, a los efectos de la prestación de alimentos, vale decir, para obtener una sanción que es, más bien, de tipo vengativo que patrimonial, porque el hijo podría encontrar la solución que él debe perseguir dentro de las disposiciones del Código Civil, incluso poniendo bajo secuestro los bienes del padre para asegurarse el pago de prestaciones alimenticias—, es necesario que se establezca la exigencia primordial de que éste haya procedido dolosamente al negarle alimentos, y

no por la simple negativa, que puede estar fundada en situaciones que el padre interpreta y aprecia como justificadas.

De manera que para que haya punibilidad, tiene que configurarse una conducta delictuosa. Yo considero que, dada la naturaleza particularísima de esta ley, si no hay dolo no puede haber delito, ni puede haber sanción.

La expresión «maliciosamente» no es una expresión que tenga —diría— carta de ciudadanía en la terminología técnica del derecho penal, ni en el derecho civil. El término técnico es el de dolo, que es el que, en realidad, corresponde aplicar a estos supuestos.

Por otra parte es necesario aclarar si esta doble categoría de sanciones es a los efectos de conmutar una por otra, es decir si la pena de prisión de un mes a dos años es conmutable por la pena de multa, o si las dos penalidades se unifican y se suman o si son de aplicación indistinta y la una excluyente de la otra. El proyecto de ley no dice nada. Establece que se impondrá prisión de un mes a dos años, o multa de quinientos a dos mil pesos. Esto es necesario que el proyecto lo aclare.

En síntesis, yo —que considero malo este proyecto—, estimo que es necesario dejar bien establecido en qué supuesto un hijo puede llevar a los tribunales criminales a sus padres, y ese supuesto tiene que ser restrictivo, grave.

Sr. Visca. — Para una moción de orden pido la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Hago moción de que se cierre el debate sobre este artículo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de cerrar el debate, propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rojas (A.). — Las reflexiones que estamos haciendo tienden a mejorar al artículo. Si la Presidencia me lo permite...

Sr. Presidente (Cámpora). — Reglamentariamente la Presidencia no puede acceder a lo solicitado por el señor diputado, porque se está votando.

—Resulta afirmativa de 69 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 1º del proyecto que la Cámara en comisión ha adoptado como despacho.

—Resulta afirmativa de 62 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la proposición del señor diputado por Córdoba, de que se agregen las palabras «sin justa causa» después de «subtrajeren»; de modo que

diría: «se subtrajeren sin justa causa a prestar los medios», etcétera.

Sr. Visca. — Nos oponemos al agregado, porque va a facilitar las chicanas de los leguleyos.

—Resulta negativa de 59 votos; votan 91 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por San Juan, que consiste en incluir la palabra «maliciosamente» después de «subtrajeren».

—Resulta negativa de 49 votos; votan 93 señores diputados.

Sr. Colom. — Pido la rectificación de la votación.

Sr. Visca. — El bloque peronista va a votar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Sr. Colom. — Que se haga una votación nominal.

Sr. Vischi. — ¿Cree el señor diputado por la Capital que la votación nominal va a hacernos cambiar nuestro voto?

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

—No resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia aclara al señor diputado por Buenos Aires que la coma a que él hizo referencia figura en el despacho por un error de imprenta, que ha quedado salvado.

Sr. Monjardin. — Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Cámpora). — El señor diputado por Buenos Aires ha propuesto como 2º un artículo nuevo.

Sr. Visca. — Deseo que se lea el artículo que he propuesto.

Sr. Rojas (A.). — Señor presidente: nos hallamos en una confusión y deseo que se rectifique la votación sobre la inclusión de las palabras «dolosamente» o «maliciosamente.»

Sr. Presidente (Cámpora). — Está cerrado el debate.

Sr. Rojas (A.). — Que se rectifique o que se reconsidere.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a rectificar la votación.

La Presidencia se permite aclarar que lo que se vota es si se incorpora al artículo 1º la palabra «baliciosamente», después de las palabras «se subtrajeren».

—Resulta negativa de 54 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se va a leer el artículo que propone el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Dice así: Perderá la patria potestad el cónyuge que teniendo sentencia judicial a su favor sobre la tenencia de hijos no les prestare los medios necesarios para su subsistencia y educación.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Rojas (A.). — El señor diputado por Buenos Aires, que ha proclamado la norma de que nosotros debemos atenernos al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, se sale de esa regla, que él mismo proclama, interponiendo otra que, ésa sí, está fuera de lugar.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Celebro contar al señor diputado por Santiago del Estero entre los defensores de los proyectos del Poder Ejecutivo.

Yo me he referido al proyecto en sí del Poder Ejecutivo, cuyo articulado va a votar el bloque peronista con esa redacción.

Referente a este artículo que he propuesto ya manifesté hoy cuál era el alcance.

Los señores diputados Bonazzola y Absalón Rojas me han dado una razón fundamental, que ha completado, con su autorizada opinión, el representante de nuestro sector, señor diputado Conte Grand. Leyendo el artículo 307 del código, modificado últimamente, me refirí en la resolución que había tomado de retirar el artículo, y lo hago con la esperanza de que los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires también se den por enterados de este asunto.

Sr. Presidente (Cámpora). — El señor diputado por Buenos Aires ha retirado el artículo que proponía; no hay, pues, nada en discusión.

Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 2º.

Sr. Astorgano. — Hago moción de que se suprima la lectura del texto de los artículos, enunciándose sólo el número respectivo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — En este artículo 2º hay un inciso, el c), que me parece de una gravedad tan extrema que sólo inadvertidamente ha podido pasársele a los que proyectaron la ley, como a la comisión que la ha estudiado, y que se

refiere a la responsabilidad penal del tutor, curador o guardador con respecto al menor o incapaz que tuviese bajo su guarda, tutela o curatela.

Todos sabemos que la tutela y la curatela son instituciones que implican un gravamen personal para el que desempeña las funciones inherentes; son instituciones tendientes a dar protección a la persona y a los bienes del menor, pero que no pueden aparejar responsabilidad patrimonial de asistencia para el que las cumple, sino en la medida en que teniendo bienes del propio pupilo no los invirtiera en la atención de su subsistencia.

De esta norma se deriva una responsabilidad penal del tutor o curador que no teniendo fondos de su pupilo no le proporciona alimentos. Esto y anular definitivamente la institución de la tutela o de la curatela es exactamente lo mismo. No habrá nadie que quiera aceptar ser tutor de un menor, si ha de asumir la tremenda responsabilidad penal de ir a la cárcel porque no ha invertido su propio peculio en proporcionar al menor que no los tiene los medios necesarios para su subsistencia.

En cuanto a lo del guardador, que presentado en la forma en que lo hace el proyecto es toda una novedad en el derecho argentino, su responsabilidad penal me parece menos admisible todavía. El guardador no existe como institución destinada a la protección de los menores; no existe el guardador como un elemento que se vincule, diría, a la suerte del menor que está bajo su guarda. Se trata, en todo caso, de una mera situación de hecho a la que las leyes suelen atribuirles ciertos efectos. ¿Cómo es posible entonces que por esta ley sometamos a sanciones penales a quien no tiene ninguna obligación civil de prestar alimentos o de prestar auxilio al menor que está bajo su guarda? Dejo planteado este interrogante, que, a mi juicio, es de extrema gravedad.

Se lleva este proyecto a extremos tales que en realidad se va a castigar a la persona que no le proporcione alimentos a quien está bajo su guarda, sin que ninguna ley le imponga previamente tal obligación. El absurdo jurídico es elocuente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Beretta. — Voy a sostener el artículo tal cual está. Y tal cual está, está bien, por las razones que voy a aducir.

El señor diputado Yadarola dice que nadie va a querer ser tutor, porque ¿quién va a querer asumir la responsabilidad penal por no suministrar al pupilo los medios materiales necesarios de subsistencia? Pero yo le diría al señor diputado Yadarola: ¿Qué interesa a la sociedad que se designe un tutor que va a dejar abandonado

y sin los medios necesarios de subsistencia al pupilo?

Precisamente lo que quiere este proyecto, venido del Poder Ejecutivo, es que esas personas que van a substituir a los miembros de la familia, al padre en este caso, asuman la responsabilidad que al padre corresponde. Y si no están en condiciones de asumir esa responsabilidad no tienen para qué ser tutores.

No se trata de sancionar con una pena al tutor por el simple hecho de no suministrar los bienes materiales a su pupilo. El tutor incurre en delito cuando se substraen a la prestación. «Substraer» significa eludir el cumplimiento de un deber. El delito resulta de un proceso psíquico doloso, que es el hecho subjetivo, mientras el hecho objetivo es la realización o la omisión de un hecho. No hay delito si no hay intención dolosa.

Tranquilícese el señor diputado Yadarola, que no habrá de castigarse al tutor por el simple hecho de no suministrar los bienes materiales a su pupilo, sino cuando esa falta de suministro ocurra dolosamente, es decir, cuando se substraer al cumplimiento de su deber. Vale decir que se presupone que está en condiciones de suministrar los bienes materiales.

Es exacto que en el proyecto del doctor Peco se habla de la justa causa. Es exacto también que en el proyecto de Coll y de Eusebio Gómez no se habla de justa causa y se emplea la palabra «substraer» porque en ella va implícita la intención dolosa. No basta que un padre, tutor, curador o guardador no preste asistencia material al pupilo para incurrir, por ese solo hecho, en delito. Es necesario que disponga de los bienes materiales para hacer la prestación. Ese es el sentido de la palabra «substraer».

En ese orden de ideas, el proyecto está perfectamente redactado. Por eso nuestro bloque rechazó los agregados de las palabras «maliciosa» y «justa causa».

Repito que si el adoptante o el tutor se proponen substraerse a la prestación de bienes materiales al niño adoptado, a la sociedad no le interesa tal adoptante ni tal tutor. Lo que interesa a la sociedad es, precisamente —contesto aquí las aseveraciones del señor diputado por Córdoba—, fortificar la familia basada en el vínculo de la sangre. La familia consolidada no ha de servir nunca de pedestal al totalitarismo. La familia, como el matrimonio, es el núcleo en el cual el individuo puede lograr la plenitud de su desarrollo físico, mental y espiritual. Eso es lo que queremos afianzar, defender, fortificar y conservar, tal cual es el propósito del Poder Ejecutivo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Conte Grand. — La exposición del señor diputado Beretta me exime en buena parte de

contestar las observaciones del señor diputado por Córdoba.

El doctor Yadarola, cuya autoridad en materia jurídica no desconozco, señaló que, según nuestra ley civil, el tutor y el curador no están obligados a prestar alimentos al pupilo y a la persona incapaz que están bajo su potestad, y que la figura del guardador es algo insólito en el derecho argentino.

Respecto de las dos primeras observaciones, en lo que concierne al tutor y al curador, debo contestar al señor diputado por Córdoba que si la ley civil dictada hace muchos años y con otra mentalidad que no es la actual, no ha contemplado esa obligación esencial de que el tutor provea a la subsistencia de su pupilo, aun cuando no tenga bienes de éste —y en el mismo caso la obligación del curador—, esta ley que se incorpora al derecho penal argentino crea la obligación.

No hay ningún inconveniente en que la cree ahora que estamos viviendo un sentido social diferente.

En cuanto a la figura del guardador, no es exacto, señor diputado Yadarola, que no exista en el orden jurídico argentino. Aunque las leyes civiles no hayan creado la institución de la guarda o la figura del guardador...

Sr. Yadarola. — A eso me he referido.

Sr. Conte Grand. — ...el Código Penal vigente en muchos casos se refiere a la existencia real, que no podemos desconocer, del guardador, de la persona que, en reemplazo de los padres y mientras no haya una tutela legalmente discernida, tiene un poder de hecho sobre el menor. Y para la persona que asuma esa responsabilidad la ley penal también crea la obligación de prestar asistencia, por lo que no debemos incurrir en la confusión de pensar que esto irá como un aditamento de la ley civil para penar los casos en que la ley civil impone un deber y, correlativamente, un derecho a la asistencia económica mediante la prestación de alimentos, sino que, como ya lo señalé en mi exposición en general, se trata de algo más restringido que la obligación alimentaria: se crea esta nueva figura con ánimo de proteger a los menores que están bajo la guarda de una persona.

Ha señalado el señor diputado Beretta que este proyecto tiene un sentido eminentemente social, y nosotros, los diputados de la mayoría —e incluso, supongo, muchos legisladores del sector de la minoría, dado que el despacho ha sido firmado por unanimidad—, estimamos que las leyes civiles, como cualquier otra anterior, no son intangibles. Por eso vamos a estructurar este nuevo régimen, y nos responsabilizamos de él con la seguridad de que va a ser eficiente, justo y permitirá propender a la vigorización de la familia.

Sr. Astorgano. — Hago indicación de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de orden de cerrar el debate.

— Resulta afirmativa de 55 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia recuerda que, al considerarse el artículo 1º, quedó aclarado que las comas de los incisos b) y c) del artículo 2º son un error de imprenta.

Se va a votar el artículo 2º.

— Resulta afirmativa de 62 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Yadarola. — Pido la palabra para reconsiderar el artículo 2º.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Debo insistir en mi punto de vista, que lo considero perfectamente fundado, en cuanto objeto la inclusión en el inciso c) del tutor, guardador o curador entre los responsables penalmente de no prestar alimentos a los pupilos que tienen bajo su tutela o curatela, o simple guardá.

Sin duda alguna hay aquí una confusión de conceptos. Se asimila la situación del padre y la situación del adoptante a la del curador, tutor o guardador. En ello el error de concepción jurídica es incuestionable. El padre tiene obligaciones consagradas por el régimen de la familia para con los hijos, y éstos para con los padres.

En el caso de la adopción hemos sancionado un régimen exactamente análogo al de la patria potestad. Hay obligaciones recíprocas, y estaría dentro de la lógica del proyecto mantener esas responsabilidades; pero yo pregunto: ¿dónde está consagrada la obligación del tutor, curador o guardador, de prestar con sus bienes alimentos a los menores? Habría que empezar creando la obligación para crear la sanción penal por su incumplimiento. Es absurdo jurídicamente que se sancione una obligación que no existe. Si se quiere castigar al tutor, curador o guardador que no presta alimentos o protección a su pupilo, hay que empezar estableciendo la obligación de prestarlos, pues esa obligación no existe en el sistema jurídico argentino. Ese es un error gravísimo que dejo señalado a la consideración de la Cámara.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por Córdoba.

— Resulta negativa de 52 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Rojas (A.). — Al referirme al proyecto de ley en su aspecto general, he señalado ya el grave peligro de introducir en el seno del hogar intervenciones excesivas o extrañas, entre ellas la justicia, digamos más bien el Estado, puesto que tratándose de leyes penales está también autorizada la intervención peligrosa de la policía.

La tendencia general de la legislación en esta materia es, precisamente, restringir esa intervención. Tanto es así, que esta misma ley la ha restringido al caso de la falta de asistencia en el orden material, económico.

En el Código de Manú se castigaba aún la falta de cumplimiento del débito sexual, y aun en el código italiano, en cierta manera, de acuerdo a alguna interpretación, se considera que eso estaba también alcanzado por la sanción penal.

La tendencia es a restringir esta intervención del Estado, sin establecer ni consagrar, por eso, la impunidad de esta falta de asistencia en el aspecto económico. Pero para evitar, como digo, estas intromisiones extrañas, para evitar que por defender el santuario del hogar — como diría el padre Filippo —, vayamos a crear los riesgos de una intervención excesiva, indiscreta, imprudente, en el hogar, debe agregarse en este artículo un párrafo que diga así: «El proceso penal requiere la instancia privada del afectado, y el acusado quedará exento de pena en cuanto cumpliera la prestación omitida.»

Yo planteo el absurdo a que va a llevar la aplicación de esta ley: un padre que lo someten a prisión, desampara obligadamente a su familia. Así como en materia de injurias la retractación clausura el procedimiento, así como el casamiento del raptor extingue la acción penal, de idéntica manera deberá establecerse que el cumplimiento de la obligación de asistencia extingue la acción penal en este caso. La prisión del padre es el desamparo de la familia; fatalmente se ha de agravar la situación de la familia. Es fundamental ese agregado.

Sr. Conte Grand. — El proyecto en lo que a las sanciones se refiere da acción pública en todos los casos, menos en el que vamos a considerar luego en el artículo 4º, cuando se trata de la prestación de asistencia familiar entre cónyuges. Para ese otro supuesto la acción es privada.

No existe la consecuencia lesiva que señala el señor diputado Rojas, de la prisión del padre, porque todos los elementos de esta figura precisan perfectamente que el padre — siguiendo este ejemplo — va a ser castigado con multa o con prisión, según sea el arbitrio del juez, después de haberse desligado efectivamente del cumplimiento de esa obligación esencial de la asistencia económica.

Quiere decir que la situación de la víctima no se va a ver más perjudicada. Podrá prolongarse ese estado durante cierto tiempo, pero ese mal estará compensado largamente por la circunstancia...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Conte Grand. — La mayor parte de las legislaciones han establecido este delito con carácter de acción pública. De esa circunstancia no se deriva ningún inconveniente, porque un menor de edad que se encuentra en esa situación de abandono, no puede poner en movimiento una acción de carácter privado. Y cuando un núcleo familiar está disgregado, en plena decadencia, el hecho de que la acción penal se introduzca en la familia, no crea un mal mayor que el que va a restañar.

De modo que el proyecto, siguiendo en esto la generalidad de las legislaciones, no crea ningún riesgo ni ningún mal.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — El señor diputado Conte Grand parte de una base falsa, que ya ha sido completamente abandonada, y es aquella que postulaba que el simple temor al castigo iba a hacer que la gente cumpliera con sus obligaciones sociales. Ello motivó el abandono de la pena de muerte, ocasión en la que se discutió este punto con toda extensión.

El hecho de que esté la amenaza del Estado del punto de vista penal, no le va a hacer cumplir a nadie por solo imperio. De modo que un padre que, dolosamente, no cumple con la obligación de prestar alimentos al hijo, será llevado a los estrados penales y castigado. Aunque quiera cumplir en esa instancia con lo que la ley le obliga, ya está en movimiento todo el proceso penal, se lo tendrá que castigar y meterlo en la cárcel.

Por consiguiente, un padre que mantiene a su familia, y va a la cárcel por un tiempo en razón de no cumplir con respecto a un miembro, deja al resto de la familia, a los demás hijos desprotegidos y en la misma situación del miembro que motivó la sanción. De manera que habrá que buscar quien proteja a la esposa y a los hijos.

Por las razones que he expuesto brevemente, considero que debe agregarse a este artículo la segunda parte de la proposición del señor diputado Rojas; vale decir que no se podrá penar, de acuerdo a lo que señalan los artículos anteriores, cuando el padre da cumplimiento en ese instante a la obligación. El fin perseguido por la ley es que se cumplan las obligaciones familiares, y no debemos perderlo de vista. Eso es lo importante y no la pena.

Sr. Astorgano. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Astorgano. — Hago moción de cerrar el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

—Resultado afirmativa de 63 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 3º.

—Resultado afirmativa de 67 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el agregado propuesto como segundo apartado del artículo 3º por el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Rojas (A.). — Que se vote en dos partes, porque el señor diputado por La Rioja apoya una de ellas.

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se dará lectura de la primera parte del agregado propuesto por el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Dice así: «El proceso penal requiere la instancia privada del afectado».

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar.

—Resultado negativa de 49 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a leer la segunda parte.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Su texto es el siguiente: «El acusado quedará exento de pena cuando cumpliera la prestación omitida».

Sr. Albrieu. — Con este párrafo estoy de acuerdo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la segunda parte del agregado propuesto por el señor diputado por Santiago del Estero.

—Resultado afirmativa de 46 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Miel Asquía. — Solicito que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a rectificar la votación.

—Resultado negativa de 49 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 4º.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa de 56 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Corresponde votar los agregados propuestos por el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Rojas (A.). — En vista del éxito obtenido con mis anteriores proposiciones, desisto de los agregados propuestos a este artículo.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 5º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 66 votos; votan 87 señores diputados.

—El artículo 6º es de forma.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Hago moción de que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción del señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta afirmativa de 66 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda levantada la sesión.

—Es la hora 21 y 20.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 3174.

II

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LICEAGA

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1949.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Héctor J. Cámpora,

De nuestra consideración:

La Sociedad Argentina de Pediatría se dirige con todo respeto al señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Héctor J. Cámpora, y por su intermedio a ese honorable cuerpo, para interesarlo en la solución de un problema médicosocial y sanitario de importancia para la salud y la vida del niño argentino.

Nos referimos a la tos convulsiva, enfermedad de elevada morbilidad y que con carácter de endemoepidémico hace estragos en nuestro país, sin que hasta el presente se haya hecho nada oficial y organizado para combatirla. Esta enfermedad que ataca casi exclusivamente al niño, constituye un verdadero flagelo social, especialmente en los primeros años de la vida entre las clases necesitadas de nuestra población. La tos convulsiva es una enfermedad grave por sus síntomas y que de acuerdo con las estadísticas coincidentes de la mayoría de los países, produce una mortalidad mayor que la difteria, la escarlatina y el sarampión juntos.

En una reciente reunión científica celebrada en el seno de nuestra sociedad, el profesor doctor Florencio Bazán, jefe del servicio de enfermedades infectocontagiosas del hospital de Niños, en un trabajo muy documentado —que ponemos a su disposición— ha documentado estadísticamente que en un período de 10 años se han atendido, en el citado nosocomio, 13.850 casos de tos convulsiva, 7.421 de difteria, 4.711 de escarlatina y 3.259 de sarampión, o sea que la primera tiene una morbilidad casi igual a la suma de las otras tres. Y todavía esa misma estadística prueba que el 51,8 % de los casos apareció en el primer año de vida. La mortalidad por la enfermedad ha acusado cifras paralelas, ya que por tos convulsiva ella ha sido del 27,4 %, mientras que la difteria ha arrojado una cifra del 15,8 %, la escarlatina del 2,8 % y el sarampión el 5,1 %, y considerando la enfermedad en el primer año de vida la mortalidad ha dado la escalofriante cifra del 50 %.

Ninguna otra enfermedad infectocontagiosa de la infancia alcanza tan elevado índice de morbilidad como la tos convulsiva. Ella plantea un problema médicosocial y sanitario de especial importancia: especial por la edad de los niños atacados

es importante por la cantidad de víctimas que produce especialmente entre las clases necesitadas, ya que entre las clases acomodadas la mortalidad sólo es de 1,2 %, lo que indica la necesidad de tomar en cuenta este factor social en la organización de una lucha contra la enfermedad.

De la tos convulsiva conocemos en la actualidad todo o casi todo lo necesario para luchar contra ella. Conocemos la etiopatogenia, sus síntomas y complicaciones, su profilaxis y su tratamiento. En la mayoría de los países las vacunas profilácticas y los sueros de convalecientes para su terapéutica son de uso corriente y los resultados obtenidos pueden considerarse como muy satisfactorios.

Con ninguna de estas armas cuenta nuestra población, porque aunque es verdad que en el comercio existen vacunas contra la tos convulsiva, ellas no están al alcance de las clases necesitadas y en ningún hospital del país se dispone de suero de convalecientes. Todo hospital de niños debería contar con un departamento donde se provean sueros específicos para cada enfermedad infectocontagiosa, ya que en la actualidad se puede decir que ellos constituyen el único recurso eficaz para tratar a estas enfermedades.

La Sociedad Argentina de Pediatría, entidad de carácter científico, que reúne en su seno a la mayoría de los pediatras del país, considera un deber interesar a los poderes públicos en la lucha contra la tos convulsiva. La experiencia prueba que el decrecimiento continuo y sostenido de la difteria es obra de la vacunación antidiftérica y ello nos autoriza a solicitar la organización de una campaña similar contra la tos convulsiva en la esperanza de que los resultados serán igualmente brillantes.

Enterada la sociedad que representamos de que ante esa Honorable Cámara se ha de presentar un proyecto de ley sobre vacunación antioqueluchosa, brinda su caluroso apoyo a dicho proyecto como a cualquier otro que tenga por objeto la organización de una lucha integral contra esta temible enfermedad. Es por esto que con igual sentido nos dirigimos a su excelencia el señor ministro de Salud Pública.

Por todo lo anterior, la Sociedad Argentina de Pediatría ruega al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tenga en cuenta este pedido en la oportunidad necesaria.

Saludamos al señor presidente con distinguida consideración: *Rodolfo Kreutzer*, presidente; *Luis María Cuculhu*, secretario.